

LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I DEL OBJETO Y ÁMBITOS DE VALIDEZ SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LOS LINEAMIENTOS

Objeto

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto desarrollar las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.

Definiciones

Artículo 2. Además de las definiciones previstas en el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

- I. **Activo:** Todo elemento de valor para una organización, involucrado en el tratamiento de datos personales, entre los cuales se describen de manera enunciativa mas no limitativa, la base de datos de empleados, los equipos de cómputo de una oficina, los correos electrónicos, el almacenamiento de información en la nube, entre otros;
- II. **Aislamiento:** Acción de separar los activos que han sido afectados en un incidente de seguridad, del resto de los activos de la organización;
- III. **Alerta de seguridad:** Hecho o evento que se detecta y/o registra en los sistemas de tratamiento físico o electrónico, el cual advierte de un posible incidente de seguridad;
- IV. **Amenaza:** Circunstancia o condición externa, con la capacidad de causar daño a los activos de la organización, explotando una o más de sus vulnerabilidades;
- V. **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado de cumplimiento de los criterios preestablecidos para la misma;
- VI. **Confidencialidad:** Propiedad de la información para evitar su acceso, divulgación o revelación, no autorizados;



- VII. **Dato biométrico:** Propiedad física, fisiológica, de comportamiento o rasgo de la personalidad, atribuible a una sola persona y que es universal, único, permanente y medible;
- VIII. **Disponibilidad:** Propiedad de la información para ser accesible y utilizable cuando se requiera;
- IX. **Incidente de seguridad:** Cualquier violación a las medidas de seguridad físicas, técnicas o administrativas de un responsable, que afecte la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información;
- X. **Integridad:** Propiedad de la información para salvaguardar la exactitud y completitud de la información;
- XI. **Interoperabilidad:** Capacidad de los responsables transmisor y receptor para compartir infraestructura y datos personales a través de la conexión de sus respectivos sistemas o plataformas tecnológicas;
- XII. **Ley Estatal:** La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California;
- XIII. **Ley General:** La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
- XIV. **Lineamientos:** Los Lineamientos de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California;
- XV. **Lineamientos de portabilidad:** Los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales;
- XVI. **Oficial de protección de datos:** Persona especialista en protección de datos personales a la que el responsable asigna formalmente las funciones de orientar y auxiliar al titular que lo requiera en relación al ejercicio de sus derechos ARCOP, así como asesorar a las áreas del sujeto obligado y realizar las gestiones necesarias para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los sistemas de datos personales que ostenta la organización;
- XVII. **PNT:** La Plataforma Nacional de Transparencia;
- XVIII. **Ponencia:** La o el Comisionado responsable de sustanciar el recurso de revisión en términos de la Ley Estatal;
- XIX. **Portabilidad de datos personales:** Prerrogativa de la persona titular de obtener una copia de los datos que ha proporcionado al responsable del tratamiento en un formato estructurado que le permita seguir utilizándolos;
- XX. **Reglamento Interior:** El Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California;

- XXI. Remisión:** Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el responsable y el encargado, dentro o fuera del territorio mexicano;
- XXII. Respaldo:** Copia de los datos físicos, sistemas operativos, software y aplicaciones, bases de datos y/o datos de usuario originales, que se realiza con el fin de recuperarlos en caso de robo, extravío, copia, uso, acceso, tratamiento, daño, alteración o modificación, no autorizados;
- XXIII. Responsable receptor:** Cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos públicos y partidos políticos del orden estatal o municipal, que recibe directamente del responsable transmisor los datos personales en un formato estructurado y comúnmente utilizado, a petición de la persona titular;
- XXIV. Responsable transmisor:** Cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos públicos y partidos políticos del orden estatal o municipal, que comunica los datos personales, en un formato estructurado y comúnmente utilizado, a un responsable receptor, a petición de la persona titular;
- XXV. Riesgo:** Potencial o probabilidad de que ocurra un escenario donde una amenaza explote una o varias vulnerabilidades existentes en un activo o grupo de activos, y que éste cause un impacto negativo o daño;
- XXVI. Sistemas automatizados:** Conjunto de recursos, software, hardware, e infraestructura utilizada para el tratamiento de datos personales;
- XXVII. Sistema de datos personales:** Conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los Entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso;
- XXVIII. Titular:** La persona física a quien corresponden los datos personales;
- XXIX. Transferencia:** Toda comunicación de datos personales, autorizada por la persona titular, realizada a persona distinta del responsable que posee los datos personales, del encargado o de la propia persona titular de los datos personales;
- XXX. Unidad Administrativa:** Área a la que se le confieren atribuciones específicas en el reglamento interno, estatuto orgánico o instrumento normativo equivalente, que sea superior a un manual de organización;
- XXXI. Vulnerabilidad:** Circunstancia o condición propia de un activo, que puede ser explotada por una o más amenazas para causarle daño; y,
- XXXII. Vulneración de seguridad:** Incidente de seguridad que afecta los datos personales en cualquier fase de su tratamiento.

Ámbito de validez subjetivo

Artículo 3. Los presentes Lineamientos serán aplicables al Instituto, así como a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, Ayuntamientos o Concejos Municipales y a la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones lleven a cabo tratamientos de datos personales de personas físicas, en términos de los dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y en los presentes Lineamientos.

Los fideicomisos y fondos públicos considerados como entidades paraestatales de conformidad con la legislación aplicable, deberán dar cumplimiento por sí mismos a las obligaciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, a través de sus propias áreas.

En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no sean considerados una entidad paraestatal, de conformidad con la legislación aplicable, o bien, no cuenten con una estructura orgánica propia que les permita cumplir por sí mismos con lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, deberán observar lo dispuesto en dichos ordenamientos a través del ente público facultado para coordinar su operación.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de los presentes Lineamientos, los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal de conformidad en el artículo 2 de la Ley Estatal.

Ámbito de validez objetivo

Artículo 4. Los presentes Lineamientos serán aplicables al tratamiento de datos personales de personas físicas que obren en soportes físicos y/o electrónicos a que se refiere el artículo 4 de la Ley General.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 4 fracciones VIII y IX de la Ley Estatal, así como en los presentes Lineamientos, los datos personales podrán estar expresados en forma numérica, alfabética, gráfica, alfanumérica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato.

Tratamiento de datos personales de menores y adolescentes

Artículo 5. En el tratamiento de datos personales de menores de edad, el responsable deberá privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en términos de las



disposiciones previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Estatal para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, así como observar lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Interpretación

Artículo 6. Los presentes Lineamientos se interpretarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Estatal.

CAPÍTULO II DEL PADRÓN DE RESPONSABLES

Padrón de sujetos obligados responsables y oficiales de protección de datos personales

Artículo 7. El Instituto contará con un padrón de sujetos obligados responsables de la protección de datos personales, que será revisado y actualizado periódicamente y guardará relación con el padrón de sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, con excepción de los sindicatos y las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Estatal.

TÍTULO SEGUNDO PRINCIPIOS Y DEBERES CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Principios rectores de protección de datos personales

Artículo 8. En todo tratamiento de datos personales el responsable deberá observar los siguientes principios rectores de la protección de datos personales:

- I. Licitud;
- II. Finalidad;
- III. Lealtad;
- IV. Consentimiento;
- V. Calidad;
- VI. Proporcionalidad;
- VII. Información; y,

VIII. Responsabilidad.

Principio de licitud

Artículo 9. En términos del artículo 9 de la Ley Estatal, el responsable deberá tratar los datos personales que posea sujetándose a las atribuciones o facultades que la normatividad aplicable le confiera, así como con estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto en dicho ordenamiento, los presentes Lineamientos, la legislación mexicana que le resulte aplicable y, en su caso, el derecho internacional, respetando en todo momento los derechos y libertades de las personas titulares.

Principio de finalidad

Artículo 10. Para efectos de lo previsto en el artículo 9 de la Ley Estatal y de los presentes Lineamientos, se entenderá que las finalidades son:

- I. **Concretas:** cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la consecución de fines específicos o determinados, sin que admitan errores, distintas interpretaciones o provoquen incertidumbre, dudas o confusión en la persona titular;
- II. **Explícitas:** cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de manera clara en el aviso de privacidad;
- III. **Lícitas:** cuando las finalidades que justifican el tratamiento de los datos personales son acordes con las atribuciones o facultades del responsable, conforme a lo previsto en la legislación mexicana y el derecho internacional que le resulte aplicable, y
- IV. **Legítimas:** cuando las finalidades que motivan el tratamiento de los datos personales se encuentran habilitadas por el consentimiento de la persona titular, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 11 de la Ley Estatal.

Tratamiento para finalidades distintas

Artículo 11. En el tratamiento de datos personales para finalidades distintas a aquéllas que motivaron su tratamiento original a que se refiere el artículo 9, segundo párrafo de la Ley Estatal, el responsable deberá considerar:

- I. La expectativa razonable de privacidad de la persona titular, basada en la relación que tiene con ésta;
- II. La naturaleza de los datos personales;



- III. Las consecuencias del tratamiento posterior de los datos personales para la persona titular; y,
- IV. Las medidas adoptadas para que el tratamiento posterior de los datos personales cumpla con las disposiciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Principio de lealtad

Artículo 12. Para cumplir con el principio de lealtad establecido en el artículo 8 de la Ley Estatal, en el tratamiento de datos personales, el responsable deberá privilegiar en todo momento la protección de los intereses de la persona titular y su expectativa razonable de privacidad, para lo cual, no deberá obtener ni tratar datos a través de medios engañosos o fraudulentos.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por:

- I. **Medios engañosos o fraudulentos:** aquellos que el responsable utilice para tratar los datos personales con dolo, mala fe o negligencia;
- II. **Privilegiar los intereses de la persona titular:** cuando el tratamiento de datos personales efectuado por el responsable, no da lugar a discriminación o trato injusto o arbitrario contra su titular, y
- III. **Expectativa razonable de privacidad:** la confianza que la persona titular deposita en el responsable respecto a que sus datos personales serán tratados conforme a lo señalado en el aviso de privacidad y en cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Principio del consentimiento

Artículo 13. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable deberá obtener el consentimiento de la persona titular, de manera libre, específica e informada en términos del artículo 4 fracción VII de la Ley Estatal, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 11 del mismo ordenamiento.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el consentimiento se obtiene de forma:

- I. **Libre:** Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de la voluntad de la persona titular;



- II. **Específica:** Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento; e,
- III. **Informada:** Que la persona titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

La actualización de alguna de las fracciones previstas en el artículo 11 de la Ley Estatal, no exime al responsable del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en dicho ordenamiento, la Ley General y los presentes Lineamientos.

Solicitud del consentimiento

Artículo 14. En caso de que se requiera el consentimiento de la persona titular para el tratamiento de sus datos personales, la solicitud del consentimiento deberá ser concisa y entendible, estar redactada en un lenguaje claro y sencillo acorde con el perfil de la persona titular y, cuando se refiera a diversos asuntos ajenos a la protección de datos personales, deberá presentarse de tal forma que se distinga claramente de dichos asuntos.

Modalidades del consentimiento y su aplicación

Artículo 15. El consentimiento de la persona titular podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por regla general, para todo tratamiento de datos personales que se efectúe será válido el consentimiento tácito, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad de la persona titular se manifieste de manera expresa.

Consentimiento tácito

Artículo 16. El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición de la persona titular el aviso de privacidad, ésta no manifieste su voluntad en sentido contrario en términos de lo señalado en el artículo 10, segundo párrafo de la Ley Estatal.

Cuando los datos personales no se recaben directamente de la persona titular, ésta tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir el aviso de privacidad por parte del responsable, para que, en su caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus datos personales a través de los medios establecidos por el responsable.

En caso de que la persona titular no manifieste su negativa en el plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá que ha otorgado su consentimiento tácito para el tratamiento de sus datos personales, salvo prueba en contrario.

El responsable deberá documentar la puesta a disposición del aviso de privacidad.

Consentimiento expreso

Artículo 17. El consentimiento será expreso cuando la voluntad de la persona titular se manifieste de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, primer párrafo de la Ley Estatal.

Para la obtención del consentimiento expreso, el responsable deberá facilitar a la persona titular un medio sencillo y gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad y que le permita acreditar de manera indubitable y, en su caso, documentar, que otorgó su consentimiento ya sea a través de una declaración o una acción afirmativa clara.

El silencio, las casillas previamente marcadas, la inacción de la persona titular o cualquier otra conducta o mecanismo similar a los mencionados no deberán considerarse como consentimiento expreso de la persona titular.

La carga de la prueba para acreditar la obtención del consentimiento expreso correrá a cargo del responsable.

Consentimiento escrito y verbal

Artículo 18. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10, primer párrafo de la Ley Estatal y de los presentes Lineamientos se entenderá que:

- I. La persona titular otorga su consentimiento de manera verbal cuando lo externe oralmente de manera presencial o mediante el uso de cualquier otra tecnología que permita la interlocución oral, en ambos casos, ante la persona que represente al responsable; y,
- II. La persona titular otorga su consentimiento por escrito cuando manifieste su voluntad en un documento físico o electrónico, a través de cierta declaración en sentido afirmativo, firma autógrafa, huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento equivalente autorizado por la normatividad aplicable.

Obtención del consentimiento de la persona titular cuando los datos personales se recaban directamente de ésta

Artículo 19. El responsable deberá obtener el consentimiento de la persona titular para el tratamiento de sus datos personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de ésta y, en su caso, sea requerido conforme al artículo 13 de los presentes Lineamientos.

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá que el responsable obtiene los datos personales directamente de la persona titular cuando ésta los proporciona a la persona que lo representa personalmente o por algún medio que permita su entrega directa como podrían ser medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología y/o medio.

Obtención del consentimiento de la persona titular cuando los datos personales se recaben indirectamente de ésta

Artículo 20. Cuando el responsable recabe datos personales indirectamente de la persona titular y se requiera de su consentimiento conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Estatal y 13 de los presentes Lineamientos, éste no podrá tratar los datos personales hasta que cuente con la manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular, mediante la cual autoriza el tratamiento de los mismos ya sea de manera tácita o expresa, según corresponda.

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá que el responsable obtiene los datos personales indirectamente de la persona titular cuando no han sido proporcionados en los términos a que se refiere el artículo anterior, segundo párrafo de los presentes Lineamientos.

Revocación del consentimiento

Artículo 21. En cualquier momento, la persona titular podrá revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales sin que se le atribuyan efectos retroactivos a la revocación, a través del ejercicio de los derechos de cancelación y oposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Principio de calidad

Artículo 22. Para efectos del artículo 12 de la Ley Estatal y de los presentes Lineamientos, se entenderá que los datos personales son:

- I. **Exactos y correctos:** cuando los datos personales en posesión del responsable no presentan errores que pudieran afectar su veracidad;
- II. **Completo:** cuando su integridad permite el cumplimiento de las finalidades que motivaron su tratamiento y de las atribuciones del responsable; y,
- III. **Actualizados:** cuando los datos personales responden fielmente a la situación actual de la persona titular.

Presunción de calidad de los datos personales cuando se obtienen indirectamente de la persona titular

Artículo 23. Cuando los datos personales fueron obtenidos indirectamente de la persona titular, el responsable deberá adoptar medidas de cualquier naturaleza dirigidas a garantizar que éstos responden al principio de calidad, de acuerdo con la categoría de datos personales y las condiciones y medios del tratamiento.

Supresión de los datos personales

Artículo 24. En la supresión de los datos personales a que se refiere el artículo 12, párrafo tercero de la Ley Estatal, el responsable deberá establecer políticas, métodos y técnicas orientadas a la supresión definitiva de éstos, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima.

En el establecimiento de las políticas, métodos y técnicas a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá considerar, al menos, los siguientes atributos y el o los medios de almacenamiento, físicos y/o electrónicos en los que se encuentren los datos personales:

- I. **Irreversibilidad:** que el proceso utilizado no permita recuperar los datos personales;
- II. **Seguridad y confidencialidad:** que en la eliminación definitiva de los datos personales se consideren los deberes de confidencialidad y seguridad a que se refieren la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos; y,
- III. **Favorable al medio ambiente:** que el método utilizado produzca el mínimo de emisiones y desperdicios que afecten el medio ambiente.

Principio de proporcionalidad

Artículo 25. En términos del artículo 12 séptimo párrafo de la Ley Estatal, y de los presentes Lineamientos, se entenderá que los datos personales son adecuados, relevantes y estrictamente necesarios cuando son apropiados, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su obtención, de acuerdo con las atribuciones conferidas al responsable por la normatividad que le resulte aplicable.

Criterio de minimización

Artículo 26. El responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar los datos personales tratados, al mínimo necesario, con relación a las finalidades que motivan su tratamiento.

Principio de información

Artículo 27. El responsable deberá informar a las personas titulares, a través del aviso de privacidad, la existencia y las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.

Todo responsable debe poner a disposición de la persona titular el aviso de privacidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 fracción II, 13 y 14 de la Ley Estatal, y en los presentes Lineamientos, con independencia de que no se requiera de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

Objeto del aviso de privacidad

Artículo 28. El aviso de privacidad tiene por objeto informar a la persona titular sobre los alcances y condiciones generales del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de éstos y, en consecuencia, mantener el control y disposición de los mismos.

Características del aviso de privacidad

Artículo 29. El aviso de privacidad deberá caracterizarse por ser sencillo, con la información necesaria, expresado en lenguaje claro y comprensible y con una estructura y diseño que facilite su entendimiento, atendiendo al perfil de las personas titulares a quienes irá dirigido, con la finalidad de que sea un mecanismo de información práctico y eficiente.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley Estatal, en el aviso de privacidad queda prohibido:

- I. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas;
- II. Incluir textos o formatos que induzcan a las personas titulares a elegir una opción en específico;
- III. Marcar previamente casillas, en caso de que éstas se incluyan, para que las personas titulares otorguen su consentimiento, o bien, incluir declaraciones orientadas a afirmar que la persona titular ha consentido el tratamiento de sus datos personales sin manifestación alguna de su parte; y,
- IV. Remitir a textos o documentos que no estén disponibles para las personas titulares.

Medios de difusión del aviso de privacidad

Artículo 30. El responsable podrá difundir, poner a disposición o reproducir el aviso de privacidad en formatos físicos y electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o a través de cualquier otra tecnología que permita su eficaz comunicación.

En todos los casos, el responsable deberá ubicar el aviso de privacidad en un lugar visible que facilite la consulta de la persona titular y que le permita acreditar fehacientemente el cumplimiento de esta obligación ante el Instituto.

Denominación del responsable en el aviso de privacidad simplificado e integral

Artículo 31. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar su denominación completa y podrá incluir, de manera adicional, la denominación, abreviaturas o acrónimos por los cuales es identificado comúnmente por el público en general y concretamente por el público objetivo a quien va dirigido el aviso de privacidad.

Finalidades del tratamiento en el aviso de privacidad simplificado e integral

Artículo 32. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, el responsable deberá describir puntualmente cada una de las finalidades para las cuales se tratarán los datos personales conforme lo siguiente:

- I. El listado de finalidades deberá ser completo y no utilizar frases inexactas, ambiguas o vagas, como "entre otras finalidades", "otros fines análogos" o "por ejemplo";
- II. Las finalidades descritas en el aviso de privacidad deberán ser específicas, redactadas con claridad y de tal manera que la persona titular identifique cada una de éstas y no tenga confusión sobre el alcance de las mismas; y,
- III. El listado de finalidades deberá identificar y distinguir aquellas finalidades que requieren del consentimiento de la persona titular de aquéllas que no lo requieren.

Información sobre transferencias de datos personales en el aviso de privacidad simplificado e integral

Artículo 33. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar las transferencias de datos personales que requieran para su realización, del consentimiento de la persona titular, precisando:

- I. Los destinatarios o terceros receptores, de carácter público o privado, nacional y/o internacional, de los datos personales, ya sea identificando cada uno de ellos por su



nombre, denominación o razón social; o bien, clasificándolos por categorías según corresponda; y,

- II. Las finalidades de las transferencias de los datos personales relacionadas por cada destinatario o tercero receptor.

Mecanismos y medios para manifestar la negativa de la persona titular en el aviso de privacidad simplificado e integral

Artículo 34. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, el responsable deberá incluir e informar sobre los mecanismos y medios que tiene habilitados para que la persona titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para aquellas finalidades que requieran de su consentimiento, en términos de los artículos 9 de la Ley Estatal y 10 de los presentes Lineamientos, así como para la transferencia de sus datos personales cuando su autorización sea exigible en términos de lo previsto en el artículo 36 de la Ley Estatal.

El responsable podrá valerse de la inclusión de casillas u opciones de marcado en el propio aviso de privacidad, o bien, cualquier otro medio que determine pertinente, siempre y cuando el medio esté disponible al momento en que la persona titular consulte el aviso de privacidad y permita que éste manifieste su negativa, previo al tratamiento de sus datos personales o a la transferencia de éstos, según corresponda.

Consulta del aviso de privacidad integral en el aviso de privacidad simplificado

Artículo 35. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 fracción V de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar, en el aviso de privacidad simplificado, el sitio, lugar o mecanismo implementado para que las personas titulares puedan conocer el aviso de privacidad integral.

En la selección de este mecanismo, el responsable deberá considerar el perfil de las personas titulares, la forma en que mantiene contacto o comunicación con ellas, que sean gratuitos, de fácil acceso, con la mayor cobertura posible y que estén debidamente habilitados y disponibles en todo momento.

Transferencias que no requieren consentimiento en el aviso de privacidad integral

Artículo 36. Además de los elementos informativos a que se refiere el artículo 14 de la Ley Estatal, el responsable podrá comunicar en el aviso de privacidad integral, al menos, las transferencias de datos personales que no requieran del consentimiento de la persona titular.

Información de las transferencias de datos personales en el aviso de privacidad integral

Artículo 37. Para informar a la persona titular sobre las transferencias nacionales y/o internacionales de datos personales que, en su caso, efectúe, y que no requieran de su consentimiento, el responsable deberá indicar lo siguiente en el aviso de privacidad integral:

- I. Los destinatarios o terceros receptores, de carácter público o privado, nacional y/o internacional, de los datos personales, identificando cada uno de éstos por su nombre, denominación o razón social;
- II. Las finalidades de las transferencias de los datos personales relacionadas por cada destinatario o tercero receptor, y
- III. El fundamento legal que lo faculta o autoriza para llevarlas a cabo, señalando el o los artículos, apartados, fracciones, incisos y nombre de los ordenamientos o disposición normativa vigente, precisando su fecha de publicación o, en su caso, la fecha de la última reforma o modificación.

Domicilio del responsable en el aviso de privacidad integral

Artículo 38. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, en el aviso de privacidad integral el responsable deberá indicar su domicilio sin omitir la calle, número, colonia, ciudad, municipio o delegación, código postal y entidad federativa.

El responsable podrá incluir otros datos de contacto como podrían ser, de manera enunciativa más no limitativa, la dirección de su página de Internet, correo electrónico y número telefónico habilitados para la atención del público en general.

Datos personales en el aviso de privacidad integral

Artículo 39. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, en el aviso de privacidad integral el responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, tanto los que recaba directamente de la persona titular como aquéllos que obtiene indirectamente, distinguiendo expresamente los datos personales de carácter sensible.

El responsable deberá cumplir con esta obligación ya sea identificando puntualmente cada uno de los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, o bien, señalando el tipo de datos personales según corresponda.



De manera enunciativa más no limitativa, el responsable podrá considerar los siguientes tipos de datos personales: de identificación, laborales, académicos, biométricos, patrimoniales, sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio, características físicas, migratorios, socioeconómicos, entre otros.

El responsable podrá informar sobre los medios y/o fuentes a través de las cuales obtiene los datos personales, así como asociar el tipo de dato personal o categoría a cada una de las fuentes señaladas.

Fundamento legal en el aviso de privacidad integral

Artículo 40. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, en el aviso de privacidad integral, el responsable deberá señalar el o los artículos, apartados, fracciones, incisos y nombre de los ordenamientos o disposición normativa vigente que lo faculta o le confiera atribuciones para realizar el tratamiento de datos personales que informa en el aviso de privacidad, precisando su fecha de publicación o, en su caso, la fecha de la última reforma o modificación, con independencia de que dicho tratamiento requiera del consentimiento de la persona titular.

Mecanismos y medios para el ejercicio de los derechos ARCOP en el aviso de privacidad integral

Artículo 41. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, en el aviso de privacidad integral, el responsable deberá informar sobre los mecanismos, medios y procedimientos habilitados para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP.

En el caso del procedimiento, el responsable podrá describirlo puntualmente en el propio aviso de privacidad integral, o bien, remitir a la persona titular a los medios que tiene disponibles para que conozca dicho procedimiento.

En ambos casos, el responsable deberá informar, al menos, lo siguiente:

- I. Los requisitos que deberá contener la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP a que se refiere el artículo 31 de la Ley Estatal y 15 de los Lineamientos de portabilidad, en su caso;
- II. Los medios a través de los cuales la persona titular podrá presentar solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP;

- III. Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados que, en su caso hubiere establecido para facilitar a la persona titular el ejercicio de sus derechos ARCOP;
- IV. Los medios habilitados para dar respuesta a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP;
- V. La modalidad o medios de reproducción de los datos personales;
- VI. Los plazos establecidos dentro del procedimiento, los cuales no deberán contravenir lo previsto en los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley Estatal, así como lo dispuesto en el Título Tercero de los presentes Lineamientos; y,
- VII. El derecho que tiene la persona titular de presentar un recurso de revisión ante el Instituto en caso de que el responsable se hubiere negado a dar trámite a una solicitud de derechos ARCOP, estar inconforme con la respuesta o no haber recibido ésta.

Portabilidad de datos personales en el aviso de privacidad integral

Artículo 42. Cuando sea técnicamente posible, el responsable deberá informar al titular, en el aviso de privacidad integral, sobre la posibilidad que tiene de solicitar la portabilidad de sus datos personales y su alcance; los tipos o categorías de datos personales que técnicamente sean portables; el o los tipos de formatos estructurados y comúnmente utilizados disponibles para obtener o transmitir sus datos personales, así como los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para que la persona titular pueda solicitar la portabilidad de sus datos personales.

Domicilio de la Unidad de Transparencia en el aviso de privacidad integral

Artículo 43. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, en el aviso de privacidad integral, el responsable deberá indicar el domicilio de su Unidad de Transparencia señalando, al menos, la calle, número, colonia, ciudad, municipio o delegación, código postal y entidad federativa, así como su número y extensión telefónica.

Cambios al aviso de privacidad en el aviso de privacidad simplificado e integral

Artículo 44. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar el o los medios disponibles a través de los cuales hará del conocimiento de la persona titular los cambios o actualizaciones efectuados al aviso de privacidad simplificado e integral.

Para tal efecto, el responsable deberá incluir en ambas modalidades del aviso de privacidad, la fecha de su elaboración, o bien, la última fecha en que éstos hubieren sido actualizados, en su caso.

Momentos para la puesta a disposición del aviso de privacidad simplificado e integral

Artículo 45. El responsable deberá poner a disposición de la persona titular el aviso de privacidad simplificado en un primer momento, lo cual no le impide que pueda dar a conocer el aviso de privacidad integral desde un inicio si lo prefiere.

En ambos casos, el aviso de privacidad se pondrá a disposición conforme a las siguientes reglas:

- I. De manera previa a la obtención de los datos personales, cuando los mismos se obtengan directamente de la persona titular, independientemente de los formatos o medios físicos y/o electrónicos utilizados para tal fin, o
- II. Al primer contacto con la persona titular o previo al aprovechamiento de los datos personales, cuando éstos se hubieren obtenido de manera indirecta de la persona titular.

El aviso de privacidad integral deberá estar publicado de manera permanente en el apartado virtual de protección de datos personales del sujeto obligado, a efecto de que la persona titular lo consulte en cualquier momento y el Instituto pueda acreditar tal situación fehacientemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 246 de los presentes Lineamientos.

Casos en los que se requiere un nuevo aviso de privacidad

Artículo 46. El responsable deberá poner a disposición de la persona titular, un nuevo aviso de privacidad, en sus dos modalidades, de conformidad con lo que establecen la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos cuando:

- I. Cambie su identidad;
- II. Requiera recabar datos personales sensibles adicionales a aquéllos informados en el aviso de privacidad original, los cuales no se obtengan de manera directa de la persona titular y se requiera de su consentimiento para el tratamiento de éstos;
- III. Cambie las finalidades señaladas en el aviso de privacidad original, o
- IV. Modifique las condiciones de las transferencias de datos personales o se pretendan realizar transferencias no previstas inicialmente y el consentimiento de la persona titular sea necesario.



Carga de la prueba para acreditar la puesta a disposición del aviso de privacidad

Artículo 47. La carga de la prueba para acreditar la puesta a disposición del aviso de privacidad, recaerá, en todos los casos, en el responsable.

Principio de responsabilidad

Artículo 48. El responsable deberá adoptar políticas e implementar mecanismos para asegurar y acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y en los presentes Lineamientos; así como establecer aquellos mecanismos necesarios para evidenciar dicho cumplimiento ante las personas titulares y ante el Instituto.

Lo anterior también resultará aplicable cuando los datos personales sean tratados por parte de un encargado a solicitud del responsable; así como al momento de realizar transferencias nacionales o internacionales de datos personales.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Estatal, en la adopción de las políticas e implementación de mecanismos a que se refiere el presente artículo, el responsable deberá considerar, de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo tecnológico y las técnicas existentes; la naturaleza, contexto, alcance y finalidades del tratamiento de los datos personales; las atribuciones y facultades del responsable y demás cuestiones que considere convenientes.

Para el cumplimiento de la presente obligación, el responsable podrá valerse de estándares de mejores prácticas nacionales o internacionales, esquemas de mejores prácticas, o cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tales fines.

Políticas y programas de protección de datos personales

Artículo 49. Con relación al artículo 15, fracciones I y II de la Ley Estatal, el responsable deberá prever y autorizar recursos, de conformidad con la normatividad que resulte aplicable, para la implementación y cumplimiento de políticas y programas de protección de datos personales que tengan por objeto establecer los elementos y actividades de dirección, operación y control de todos sus procesos que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, impliquen un tratamiento de datos personales a efecto de proteger éstos de manera sistemática y continua.



Las políticas y programas de protección de datos personales a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser aprobados, coordinados y supervisados por su Comité de Transparencia.

Capacitación

Artículo 50. Con relación al artículo 15, fracción III de la Ley Estatal, el responsable deberá establecer anualmente un programa de capacitación y actualización en materia de protección de datos personales dirigido a su personal y a encargados, el cual deberá ser aprobado, coordinado y supervisado por su Comité de Transparencia.

Sistemas de supervisión y vigilancia

Artículo 51. Con relación al artículo 15 fracciones IV y V de la Ley Estatal, por regla general, el responsable deberá revisar las políticas, programas de seguridad, el sistema de supervisión y vigilancia implementado, al menos, cada dos años, salvo que realice modificaciones sustanciales a los tratamientos de datos personales que lleve a cabo y, en consecuencia, amerite una actualización previa al plazo establecido en el presente artículo.

Atención de dudas y quejas

Artículo 52. Con relación al artículo 15, fracción VI de la Ley Estatal, el procedimiento que el responsable determine para recibir y responder dudas y quejas de las personas titulares en materia de protección de datos, deberá ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible, considerando el perfil de las personas titulares y la forma en que mantiene contacto o comunicación directa o cotidiana con ellas, así como estar habilitado en todo momento.

Protección de datos personales por diseño

Artículo 53. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 fracción VII de la Ley Estatal, el responsable deberá aplicar medidas de carácter administrativo, técnico, físico u otras de cualquier naturaleza que, desde el diseño, le permitan aplicar de forma efectiva, en sus políticas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Lo anterior, considerando los avances tecnológicos, los costos de implementación, la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento de los datos personales, los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña éste para el derecho a la protección

de datos personales de las personas titulares, así como otros factores que considere relevantes el responsable.

Protección de datos personales por defecto

Artículo 54. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 fracción VIII de la Ley Estatal, el responsable deberá aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas y orientadas a garantizar que, por defecto, sólo sean objeto de tratamiento los datos personales estrictamente necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Lo anterior resultará aplicable, de manera enunciativa más no limitativa, a la cantidad de datos personales recabados, el alcance del tratamiento, el plazo de conservación de los datos personales, entre otros factores que considere relevantes el responsable.

Tratamiento de datos personales sensibles

Artículo 55. El responsable no podrá llevar a cabo tratamientos de datos personales que tengan como efecto la discriminación de las personas titulares por su origen étnico o racial, su estado de salud presente, pasado o futuro, su información genética, sus opiniones políticas, su religión o creencias filosóficas o morales y su preferencia sexual, con especial énfasis en aquéllos automatizados.

Cumplimiento de los principios de protección de datos personales

Artículo 56. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo recaerá, en todo momento, en el responsable.

Para tal efecto, el Instituto podrá emitir herramientas que orienten el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, así como aquéllas establecidas en la Ley General, la Ley Estatal, y los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO II DE LOS DEBERES

Deber de seguridad

Artículo 57. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que le permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo



16 de la Ley Estatal, con el objeto de impedir, que cualquier tratamiento de datos personales contravenga las disposiciones de dicho ordenamiento, la Ley General y los presentes Lineamientos.

Consideraciones para la adopción de las medidas de seguridad

Artículo 58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Estatal, las medidas de seguridad que adopte el responsable deberán considerar por lo menos lo siguiente:

- I. El riesgo inherente a los datos personales tratados;
- II. La sensibilidad de los datos personales tratados;
- III. El desarrollo tecnológico;
- IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para las personas titulares;
- V. Las transferencias de datos personales que se realicen;
- VI. El número de titulares;
- VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y
- VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.

Las fracciones anteriores constituyen mínimos exigibles, por lo que el responsable podrá adoptar las medidas adicionales que estime necesarias para brindar mayores garantías en la protección de los datos personales en su posesión.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones vigentes en materia de seguridad de la información emitidas por otras autoridades, cuando éstas contemplen una mayor protección para la persona titular o complementen lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Tipos de medidas de seguridad

Artículo 59. Las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal son el conjunto de acciones, actividades, controles y/o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que le permiten al responsable proteger los datos personales.

Para efectos de lo dispuesto en dicho ordenamiento y en los presentes Lineamientos se entenderá por:

- I. **Medidas de seguridad administrativas:** Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la

22

identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales.

II. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

- a. Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;
- b. Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, recursos e información;
- c. Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la organización; y,
- d. Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.

III. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

- a. Prever que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;
- b. Generar un esquema de privilegios para que cada usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;
- c. Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento del software y hardware; y,
- d. Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales.

Medidas de seguridad para la protección de los datos personales

Artículo 60. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales a que se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas:

- I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;
- II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales;
- III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
- IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros;
- V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes en la organización del responsable;
- VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes y para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales;
- VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales; y,
- VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.

Contenido de las políticas internas de gestión y tratamiento de los datos personales

Artículo 61. Con relación a lo previsto en la fracción I del artículo anterior de los presentes Lineamientos, el responsable deberá incluir en el diseño e implementación de las políticas internas para la gestión y el tratamiento de los datos personales al menos, lo siguiente:

- I. El cumplimiento de todos los principios, deberes, derechos y demás obligaciones en la materia, de conformidad con lo previsto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos;
- II. Los roles y responsabilidades específicas de los involucrados internos y externos dentro de su organización, relacionados con los tratamientos de datos personales que se efectúen;
- III. Las sanciones en caso de incumplimiento;
- IV. La identificación del ciclo de vida de los datos personales respecto de cada tratamiento que se efectúe; considerando la obtención, almacenamiento, uso, procesamiento, divulgación, retención, destrucción o cualquier otra operación

realizada durante dicho ciclo, en función de las finalidades para las que fueron recabados;

- V. El proceso general para el establecimiento, actualización, monitoreo y revisión de los mecanismos y medidas de seguridad, considerando el análisis de riesgo realizado previamente al tratamiento de los datos personales; y,
- VI. El proceso general de atención de los derechos ARCOP.

Funciones y obligaciones

Artículo 62. Para cumplir con lo dispuesto en la fracción II del artículo 60 de los presentes Lineamientos, el responsable deberá establecer y documentar los roles y responsabilidades, así como la cadena de rendición de cuentas de todas las personas que traten datos personales en su organización, conforme al sistema de gestión implementado.

El responsable deberá establecer mecanismos para asegurar que todas las personas involucradas en el tratamiento de datos personales en su organización, conozcan sus funciones para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, así como las consecuencias de su incumplimiento.

Inventario de datos personales

Artículo 63. Con relación a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de los presentes Lineamientos, el responsable deberá elaborar un inventario con la información básica de cada tratamiento de datos personales, considerando, al menos, los siguientes elementos:

- I. El catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos personales;
- II. Las finalidades de cada tratamiento de datos personales;
- III. El catálogo de los tipos de datos personales que se traten, indicando si son sensibles o no;
- IV. El catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de la ubicación física y/o electrónica de los datos personales;
- V. La lista de personas servidoras públicas que tienen acceso a los sistemas de tratamiento;
- VI. En su caso, el nombre completo o denominación o razón social del encargado y el instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda al responsable; y,
- VII. En su caso, los destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen, así como las finalidades que justifican éstas.

Ciclo de vida de los datos personales en el inventario

Artículo 64. Aunado a lo dispuesto en el artículo anterior, en la elaboración del inventario de datos personales el responsable deberá considerar el ciclo de vida de los datos personales conforme lo siguiente:

- I. La obtención de los datos personales;
- II. El almacenamiento de los datos personales;
- III. El uso de los datos personales conforme a su acceso, manejo, aprovechamiento, monitoreo y procesamiento, incluyendo los sistemas físicos y/o electrónicos utilizados para tal fin;
- IV. La divulgación de los datos personales considerando las remisiones y transferencias que, en su caso, se efectúen;
- V. El bloqueo de los datos personales, en su caso; y,
- VI. La cancelación, supresión o destrucción de los datos personales.

El responsable deberá identificar el riesgo inherente de los datos personales, contemplando su ciclo de vida y los activos involucrados en su tratamiento, como podrían ser hardware, software, personal, o cualquier otro recurso humano o material que resulte pertinente considerar.

Tipos y categorías de datos personales

Artículo 65. En el catálogo a que se refiere la fracción III del artículo 63 de los presentes Lineamientos, los tipos de datos personales se clasificarán, de manera enunciativa más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:

- I. **Datos identificativos:** el nombre, alias, pseudónimo, edad, sexo, estado civil, domicilio, código postal, teléfono, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, Clave de Elector, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, idioma, lengua, fotografía, localidad y sección electoral y demás análogos;
- II. **Datos de origen:** origen, etnia, raza, color de piel color de ojos, color y tipo de cabello, estatura, complexión y análogos;
- III. **Datos ideológicos:** ideologías, creencias, opinión política, afiliación política, opinión pública, afiliación sindical, religión, convicción filosófica y análogos;
- IV. **Datos electrónicos:** las direcciones electrónicas tales como el correo electrónico personal, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (Media Access Control

- o dirección de control de acceso al medio), nombre de usuario, contraseñas, firma electrónica, así como cualquier información empleada por la persona, para su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas;
- V. **Datos laborales:** documentos de reclutamiento y selección, experiencia y trayectoria laboral, nombramiento, incidencias, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio y demás análogos;
 - VI. **Datos patrimoniales:** los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria, inversiones, seguros, fianzas, afores, número de tarjeta de crédito o débito, servicios contratados, referencias personales y demás análogos;
 - VII. **Datos académicos:** escolaridad, trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos, avance de créditos, tipos de exámenes, promedio y demás análogos;
 - VIII. **Datos biométricos:** las huellas dactilares, ADN, tipo sanguíneo, geometría facial o de la mano, características de iris y retina, forma de caminar, reconocimiento facial, reconocimiento de escritura, reconocimiento de voz, y demás análogos;
 - IX. **Datos adicionales de autenticación:** aquellos que, en combinación con otro de menor categoría, pudieran causar un daño excepcional a su titular como la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito, códigos de seguridad, información de banda magnética, número de identificación personal, número de seguro social, y demás análogos;
 - X. **Datos sobre la salud:** el expediente clínico de cualquier atención médica, referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, estado físico o mental de la persona y demás análogos;
 - XI. **Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales:** la información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho;
 - XII. **Datos de tránsito y movimientos migratorios:** información relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país, así como información migratoria, cédula migratoria, visa, pasaporte;
 - XIII. **Datos sensibles:** origen étnico o racial, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,



preferencia sexual, o cualquier otro que pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave a la integridad de la persona titular; y,

- XIV. Datos personales de naturaleza pública:** aquellos que por mandato legal deban ser accesibles al público.

Formatos de almacenamiento de datos personales

Artículo 66. Los formatos de almacenamiento de los datos personales a que se refiere la fracción IV del artículo 63 de los presentes Lineamientos, se distinguirán en:

- I. **Soportes físicos:** Medios de información inteligibles a simple vista, que no requieren de ningún dispositivo electrónico que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los datos. Por ejemplo, papel escrito a mano o impreso, transparencias, fotografías, placas radiológicas, entre otros.
- II. **Soportes electrónicos:** Medios de información, inteligibles solo mediante el uso de un dispositivo electrónico como una computadora, que permite examinar, modificar y almacenar los datos. Por ejemplo, discos ópticos (CD's y DVD's), cintas magnéticas de audio, video y datos, fichas de microfilm, discos duros removibles, memorias USB, y demás medios de almacenamiento masivo no volátil.

Análisis de riesgos

Artículo 67. Para dar cumplimiento a lo que establece la fracción IV del artículo 60 de los presentes Lineamientos, el responsable deberá realizar un análisis de riesgos de los datos personales tratados considerando lo siguiente:

- I. Los requerimientos regulatorios, códigos de conducta o mejores prácticas de un sector específico;
- II. El valor de los datos personales de acuerdo a su clasificación previamente definida y su ciclo de vida;
- III. El valor y exposición de los activos involucrados en el tratamiento de los datos personales;
- IV. Las consecuencias negativas para las personas titulares que pudieran derivar de una vulneración de seguridad ocurrida; y,
- V. Los factores previstos en el artículo 58 de los presentes Lineamientos.

Análisis de brecha

Artículo 68. Con relación a la fracción V del artículo 60 de los presentes Lineamientos, en la realización del análisis de brecha el responsable deberá considerar lo siguiente:



- I. Las medidas de seguridad existentes y efectivas;
- II. Las medidas de seguridad faltantes, y
- III. La existencia de nuevas medidas de seguridad que pudieran remplazar a uno o más controles implementados actualmente.

Plan de trabajo

Artículo 69. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 60 de los presentes Lineamientos, el responsable deberá elaborar un plan de trabajo que defina las acciones a implementar de acuerdo con el resultado del análisis de riesgos y del análisis de brecha, priorizando las medidas de seguridad más relevantes e inmediatas a establecer.

Lo anterior, considerando los recursos designados, el personal interno y externo en su organización y las fechas compromiso para la implementación de las medidas de seguridad nuevas o faltantes.

Monitoreo y supervisión de las medidas de seguridad implementadas

Artículo 70. Con relación a la fracción VII del artículo 60 de los presentes Lineamientos, el responsable deberá evaluar y medir los resultados de las políticas, planes, procesos y procedimientos implementados en materia de seguridad y tratamiento de los datos personales, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y, en su caso, implementar mejoras de manera continua.

Para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior del presente artículo, el responsable deberá monitorear continuamente lo siguiente:

- I. Los nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos;
- II. Las modificaciones necesarias a los activos, como podría ser el cambio o migración tecnológica, entre otras;
- III. Las nuevas amenazas que podrían estar activas dentro y fuera de su organización y que no han sido valoradas;
- IV. La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean explotadas por las amenazas correspondientes;
- V. Las vulnerabilidades identificadas para determinar aquellas expuestas a amenazas nuevas o pasadas que vuelvan a surgir;
- VI. El cambio en el impacto o consecuencias de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos en conjunto, que resulten en un nivel inaceptable de riesgo; y,

VII. Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas.

Aunado a lo previsto en las fracciones anteriores, el responsable deberá contar con un programa de auditoría interno y/o externo, para monitorear y revisar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión.

Programa de capacitación

Artículo 71. Para el cumplimiento de lo previsto en la fracción VIII del artículo 60 de los presentes Lineamientos, el responsable deberá diseñar e implementar programas a corto, mediano y largo plazo que tengan por objeto capacitar a los involucrados internos y externos en su organización, considerando sus roles y responsabilidades asignadas para el tratamiento y seguridad de los datos personales y el perfil de sus puestos.

En el diseño e implementación de los programas de capacitación a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- I. Los requerimientos y actualizaciones del sistema de gestión;
- II. La legislación vigente en materia de protección de datos personales y las mejores prácticas relacionadas con el tratamiento de éstos;
- III. Las consecuencias del incumplimiento de los requerimientos legales o requisitos organizacionales, y
- IV. Las herramientas tecnológicas relacionadas o utilizadas para el tratamiento de los datos personales y para la implementación de las medidas de seguridad.

Sistema de gestión

Artículo 72. El responsable deberá implementar un sistema de gestión de seguridad de los datos personales a que se refiere el artículo 17 de la Ley Estatal, el cual permita planificar, establecer, implementar, operar, monitorear, mantener, revisar y mejorar las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico aplicadas a los datos personales; tomando en consideración los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales y seguridad.

Documento de Seguridad

Artículo 73. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Estatal y 35 de la Ley General, el responsable deberá elaborar, difundir e implementar normas internas para la seguridad y protección de los datos personales mediante el documento de seguridad.



El documento de seguridad será de observancia obligatoria para todas las personas servidoras públicas de la organización, así como para los encargados que, conforme al artículo 4 fracción XIII de la Ley Estatal, tengan acceso a los sistemas de datos personales y/o al sitio donde se ubican los mismos; dicho documento de seguridad deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

- I. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;
- II. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales;
- III. El análisis de riesgos;
- IV. El análisis de brecha;
- V. El plan de trabajo;
- VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad; y,
- VII. El programa general de capacitación.

Actualización del documento de seguridad

Artículo 74. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Estatal, el responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los siguientes eventos:

- I. Se produzcan modificaciones relevantes en el tratamiento de los datos que impliquen un cambio en el nivel de riesgo;
- II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema de gestión;
- III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad ocurrida, o
- IV. Se implementen acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.

Vulneraciones a la seguridad

Artículo 75. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Estatal, se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, al menos, las siguientes:

- I. La pérdida o destrucción no autorizada;
- II. El robo, extravío o copia no autorizada;
- III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o,



IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.

Plazo para notificar las vulneraciones de seguridad

Artículo 76. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Estatal, el responsable deberá notificar al Instituto las vulneraciones de seguridad que de forma significativa afecten los derechos patrimoniales o morales de la persona titular, dentro en un plazo máximo de setenta y dos horas, a partir de que confirme la ocurrencia de éstas y haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de mitigación de la afectación.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, comenzará a correr el mismo día natural en que el responsable confirme la vulneración de seguridad.

Notificación de las vulneraciones de seguridad al Instituto

Artículo 77. En la notificación a que se refiere el artículo 19 de la Ley Estatal, el responsable deberá informar mediante escrito presentado en el domicilio del Instituto, o bien, a través de cualquier otro medio que se habilite para tal efecto, al menos, lo siguiente:

- I. La hora y fecha de la identificación de la vulneración;
- II. La hora y fecha del inicio de la investigación sobre la vulneración;
- III. La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida;
- IV. La descripción detallada de las circunstancias en torno a la vulneración ocurrida;
- V. Las categorías y número aproximado de personas titulares afectadas;
- VI. Los sistemas de tratamiento y datos personales comprometidos;
- VII. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata;
- VIII. La descripción de las posibles consecuencias de la vulneración de seguridad ocurrida;
- IX. Las recomendaciones dirigidas a las personas titulares;
- X. El medio puesto a disposición de las personas titulares para que puedan obtener mayor información al respecto;
- XI. El nombre completo de la o las personas designadas y sus datos de contacto, para que puedan proporcionar mayor información al Instituto, en caso de requerirse; y,
- XII. Cualquier otra información y documentación que considere conveniente hacer del conocimiento del Instituto.

Afectación de los derechos patrimoniales o morales de las personas titulares en los incidentes de seguridad

Artículo 78. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Estatal, se entenderá que se afectan los derechos patrimoniales de la persona titular cuando la vulneración esté relacionada, de manera enunciativa más no limitativa, con sus bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados o las cantidades o porcentajes relacionados con la situación económica de la persona titular.

Se entenderá que se afectan los derechos morales de la persona titular cuando la vulneración esté relacionada, de manera enunciativa más no limitativa, con sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, consideración que de sí misma tienen los demás, o cuando se menoscabe ilegítimamente su libertad o su integridad física o psíquica.

Plan de respuesta a vulneraciones e incidentes de seguridad

Artículo 79. Para cumplir con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Estatal, el responsable deberá implementar un plan de respuesta a vulneraciones e incidentes de seguridad que contemple las siguientes fases:

- I. **Preparación:** En esta fase, el responsable debe establecer medidas de seguridad de carácter preventivo, considerando lo siguiente:
 - a. Establecer e instalar alertas de seguridad en sus sistemas físicos y electrónicos, ya sean manuales o automatizadas, que detecten posibles incidentes;
 - i. De manera enunciativa mas no limitativa se consideran alertas de seguridad físicas: las alarmas contra incendios o robo; las alertas y avisos del personal de vigilancia a través de circuito cerrado de video sobre la desaparición de activos; el registro de anomalías o accesos no autorizados en las bitácoras de los sistemas de tratamiento físicos, entre otros.
 - ii. De manera enunciativa mas no limitativa se consideran alertas de seguridad electrónicas: las notificaciones de fuentes confiables sobre software malicioso; los firewalls, antivirus, filtros de contenido, sistemas de detección de intrusos; las anomalías o accesos no autorizados registrados en los medios de almacenamiento automatizados y en los equipos de cómputo, entre otros.



- b. Crear respaldos o copias de seguridad que permitan recuperar los archivos y restaurar los sistemas de tratamiento en caso de un incidente;
 - c. Designar al personal, equipo o área de la organización que, en conjunto con la persona oficial de protección de datos personales, cuenten con políticas específicas, acceso a los activos y herramientas para el monitoreo y atención de las vulneraciones e incidentes de seguridad; y,
 - d. Allegarse de herramientas de hardware y software exclusivos para atender incidentes de seguridad.
- II. **Identificación:** En esta fase, el responsable debe realizar una investigación exhaustiva sobre el incidente, que dé cuenta sobre los activos que han sido afectados. Se debe recabar y documentar la evidencia obtenida;
- III. **Contención:** En esta fase se debe realizar el aislamiento de los activos afectados y poner en operación los respaldos y copias de seguridad para reducir los efectos del incidente;
- IV. **Mitigación:** En esta fase se deben implementar las medidas de seguridad aplicables al incidente, actualizar el hardware y el software, revisar los respaldos y recolectar evidencia;
- V. **Recuperación:** En esta fase los activos afectados serán reintegrados a los sistemas de datos una vez que se encuentren funcionales y cuenten con nuevas medidas de seguridad; y,
- VI. **Bitácora de mejora continua:** En esta fase debe registrarse lo sucedido durante el incidente; generar un archivo histórico que sirva como base de conocimiento para que el personal encargado de la seguridad pueda atender incidentes futuros con base en los antecedentes; además, se debe comunicar a las áreas administrativas interesadas el estado de la seguridad de los activos después del incidente.

Cuando ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo, acciones adicionales de prevención y corrección para adecuar las medidas de seguridad existentes, a efecto de evitar que la vulneración se repita.

Notificación de las vulneraciones de seguridad a la persona titular

Artículo 80. El responsable deberá notificar a la persona titular sobre las vulneraciones de seguridad ocurridas a que se refieren los artículos 19 de la Ley Estatal y 75 de los presentes Lineamientos y, le deberá informar, al menos, lo siguiente:

- I. La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida;
- II. Los datos personales comprometidos;
- III. Las recomendaciones a la persona titular acerca de las medidas que puede adoptar para proteger sus intereses;
- IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y
- V. Los medios donde puede obtener más información al respecto.
- VI. La descripción de las circunstancias generales en torno a la vulneración ocurrida, que ayuden a la persona titular a entender el impacto del incidente; y,
- VII. Cualquier otra información y documentación que considere conveniente para apoyar a las personas titulares.

El responsable deberá notificar directamente a la persona titular la información a que se refieren las fracciones anteriores a través de los medios que establezca para tal fin.

Para seleccionar y definir los medios de comunicación, el responsable deberá considerar el perfil de las personas titulares, la forma en que mantiene contacto o comunicación con ellas, que sean gratuitos, de fácil acceso, con la mayor cobertura posible y que estén debidamente habilitados y disponibles en todo momento.

Acciones del Instituto derivadas de notificaciones de vulneraciones de seguridad

Artículo 81. En términos de lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley Estatal, y 77 de los presentes Lineamientos, una vez que le sea notificada una vulneración de seguridad, el Instituto deberá realizar las investigaciones previas a que hubiere lugar con la finalidad de allegarse de elementos que le permitan, en su caso, valorar el inicio de un procedimiento de verificación, conforme a lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Emisión de recomendaciones no vinculantes

Artículo 82. El Instituto podrá publicar directrices, recomendaciones y mejores prácticas en materia de seguridad de los datos personales, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales actuales en la materia, con la finalidad de proveer de mecanismos y



herramientas que orienten y faciliten al responsable al cumplimiento del deber de seguridad previsto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Deber de confidencialidad

Artículo 83. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo.

Cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad

Artículo 84. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, recaerá, en todo momento, en el responsable.

CAPÍTULO III DEL INFORME ANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Del informe anual de protección de datos personales

Artículo 85. Los sujetos obligados responsables deberán entregar un informe anual correspondiente al ejercicio inmediato anterior, de acciones realizadas en materia de protección de datos personales, a más tardar la primera semana del mes de febrero de cada año. Dicho informe se deberá apegar al formato y contenido que el Instituto determine en los lineamientos expedidos para tales efectos.

En caso de incumplimiento el Instituto estará en aptitud de imponer los medios de apremio o sanciones correspondientes, de conformidad con lo señalado en el artículo 79 fracción XIV de la Ley Estatal.

TÍTULO TERCERO DERECHOS DE LAS PERSONAS TITULARES Y SU EJERCICIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCOP: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD

Personas facultadas para el ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 86. Los derechos ARCOP se podrán ejercer por la persona titular o, en su caso, por la persona que actúe en su representación.

Al momento de presentar la solicitud, la persona titular deberá acreditar su identidad y, la persona que actúe en representación, en su caso, deberá acreditar su identidad y personalidad.

Ejercicio de derechos ARCOP de personas menores de edad y personas en estado de interdicción o incapacidad

Artículo 87. En el ejercicio de los derechos ARCOP de personas menores de edad o de personas físicas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, se estará a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil para el Estado de Baja California y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, así como a los artículos 88, 91, 92 93 y 94 de los presentes Lineamientos.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de personas menores de edad, se deberá privilegiar el interés superior del menor conforme a la legislación que resulte aplicable en la materia.

Ejercicio de derechos ARCOP de personas fallecidas, incapaces e interdictos

Artículo 88. Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico podrá ejercer los derechos ARCOP.

En caso de que la persona fallecida no hubiere expresado fehacientemente su voluntad, bastará que la persona que pretende ejercer los derechos ARCOP acredite su interés jurídico en los términos previstos en el presente Capítulo.

Para los efectos de la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá por interés jurídico aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento de la persona titular, pretende ejercer los derechos ARCOP de ésta, para el reconocimiento de derechos sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya tenido con la persona titular, el cual se acreditará en términos de las disposiciones legales aplicables.

Pueden alegar interés jurídico, de manera enunciativa más no limitativa las siguientes personas: el albacea, los herederos, los legatarios, los familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, lo que se acreditará con copia simple del documento delegatorio, pasado ante la fe de notario público o suscrito ante dos personas que funjan como testigos.



En el supuesto de que la persona titular hubiere sido menor de edad, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción de la persona menor de edad, su acta de nacimiento o identificación, así como la identificación de quien ejercía la patria potestad y/o tutela.

En el supuesto de que la persona titular se encuentre en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, el interés jurídico se acreditará con la copia de su acta de defunción, el documento de su identificación oficial y de quien ejercía la tutela, así como el instrumento legal de designación del tutor.

Medios para la acreditación de la identidad de la persona titular

Artículo 89. La persona titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios:

- I. Identificación oficial;
- II. Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarias que permitan su identificación fehacientemente; o,
- III. Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad de la persona titular.

Para efectos del presente Capítulo, la identidad de las personas menores de edad se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, credenciales expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte, o cualquier otro documento oficial utilizado para tal fin.

La identidad de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, pasaporte o cualquier otro documento o identificación oficial expedida para tal fin.

Medios para la acreditación de la identidad y personalidad de la persona que actúe como representante de la persona titular

Artículo 90. Cuando la persona titular ejerza sus derechos ARCOP a través una persona representante, éste deberá acreditar la identidad de la persona titular y su propia identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:



- I. Copia simple de la identificación oficial de la persona titular;
- II. Identificación oficial de la persona representante; e,
- III. Instrumento público; carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal de la persona titular.

Acreditación de personas menores de edad cuando sus padres ejercen la patria potestad

Artículo 91. Cuando la persona titular sea menor de edad y sus padres sean quienes ejerzan la patria potestad y pretendan ejercer los derechos ARCOP de ésta, además de acreditar la identidad de la persona menor de edad, se deberá acreditar la identidad y representación de los padres mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento de la persona menor de edad; y,
- II. Documento de identificación oficial del progenitor que pretenda ejercer el derecho.

Acreditación de personas menores de edad cuando una persona distinta a sus padres ejerce la patria potestad

Artículo 92. Cuando la persona titular sea menor de edad y su patria potestad la ejerce una persona distinta a los padres y sea ésta quien presente la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, además de acreditar la identidad de la persona menor de edad, se deberá acreditar la identidad y representación de la persona mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento de la persona menor de edad;
- II. Documento legal que acredite la posesión de la patria potestad; y,
- III. Documento de identificación oficial de quien ejerce la patria potestad.

Acreditación de personas menores de edad cuando son representados por una persona tutora

Artículo 93. Cuando la persona titular sea menor de edad y la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP la presente quien ejerce su tutela, además de acreditar la identidad de la persona menor de edad, la persona tutora deberá acreditar su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento de la persona menor de edad;
- II. Documento legal que acredite la tutela; y,

- III. Documento de identificación oficial de la persona tutora.

Acreditación de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial

Artículo 94. Cuando la persona titular se encuentre en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, además de acreditar la identidad de la persona titular, quien le represente deberá acreditar su propia identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Instrumento legal de designación de la persona tutora, y
- II. Documento de identificación oficial de la persona tutora.

Acreditación de las personas vinculadas a fallecidos

Artículo 95. La persona que acredite tener un interés jurídico, en términos del artículo 88 de los presentes Lineamientos deberá presentar ante el responsable los siguientes documentos:

- I. Acta de defunción de la persona titular;
- II. Documentos que acrediten el interés jurídico de quien pretende ejercer el derecho; y,
- III. Documento de identificación oficial de quien solicita el ejercicio de los derechos ARCOP.

Solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 96. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, el responsable no podrá imponer o solicitar mayores requerimientos informativos a los previstos en el artículo 31 de la Ley Estatal y 15 de los Lineamientos de portabilidad y, en atención al caso concreto, deberá ir acompañada de copia simple de los documentos previstos en los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 de los presentes Lineamientos.

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el responsable deberá observar lo siguiente:

- I. Cuando se trate de una solicitud para el ejercicio del derecho de acceso a datos personales, la persona titular podrá acompañarla, en su caso, del medio magnético, electrónico o el mecanismo a través del cual requiere la reproducción de los datos, el cual también podrá entregar una vez que sea notificada sobre la procedencia del

- ejercicio del derecho solicitado, de conformidad con lo previsto en el artículo 29, párrafo tercero de la Ley Estatal;
- II. Cuando la persona titular no pueda cubrir los costos de reproducción y/o envío de sus datos personales en virtud de su situación socioeconómica, deberá manifestar tal circunstancia en su solicitud a efecto de que la Unidad de Transparencia del responsable determine lo conducente conforme a lo previsto en el artículo 29, párrafo cuarto de la Ley Estatal;
 - III. Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, la persona titular, podrá aportar la documentación que sustente la modificación solicitada;
 - IV. En las solicitudes para el ejercicio del derecho de portabilidad se deberá indicar si lo que requiere es una copia en un formato estructurado y comúnmente utilizado, acompañando el medio de almacenamiento para la elaboración de la copia correspondiente, o bien, indicar si desea que sus datos sean transmitidos a un responsable receptor; indicar la denominación del responsable y, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, anotar la explicación general a efecto de hacer efectiva la portabilidad en un plazo menor; asimismo, adjuntar el documento que acredite la relación jurídica con el responsable;
 - V. En las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP, la persona titular o, en su caso, quien le represente, podrá aportar las pruebas que estime pertinentes para acreditar la procedencia de su solicitud, las cuales deberán acompañarse a la misma desde el momento de su presentación.

Asistencia de la Unidad de Transparencia

Artículo 97. En caso de que la persona titular o, en su caso, quien le represente acuda personalmente a las instalaciones del responsable a presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, su personal deberá orientarlos sobre la localización de la Unidad de Transparencia.

El personal de la Unidad de Transparencia del responsable deberá informar a las personas titulares sobre la obligación de acreditar su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de quien le represente; asimismo, deberá auxiliarles y orientarles en todo momento en la elaboración de las solicitudes para el ejercicio de sus derechos ARCOP, en especial en aquellos casos en que no sepan leer ni escribir.

Para el caso de las personas con alguna discapacidad, el personal de la Unidad de Transparencia del responsable procurará atender a cada una de ellas, de acuerdo con su

situación particular, facilitando en todo momento la información que requieran para el ejercicio de sus derechos ARCOP.

Medidas especiales para personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena

Artículo 98. El responsable procurará que las personas con algún tipo de discapacidad y los hablantes de lengua indígena, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, sus derechos ARCOP, para lo cual deberá promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que les auxilien en la recepción y entrega de las respuestas a solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP en lengua indígena, braille o cualquier formato que se requiera en función de la necesidad de la persona titular, en forma más eficiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el responsable podrá adoptar las siguientes medidas:

- I. Contar con equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura braille y lectores de texto;
- II. Reservar lugares de estacionamiento para personas con discapacidad;
- III. Contar con intérpretes oficiales de lenguas indígenas;
- IV. Facilitar la utilización del lenguaje de señas o cualquier otro medio o modo de comunicación;
- V. Brindar las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo;
- VI. Apoyar en la lectura de documentos;
- VII. Contar con rampas para personas con discapacidad; o,
- VIII. Cualquier otra medida física o tecnológica que ayude a las personas con discapacidad y/o hablantes de lengua indígena a ejercer de manera eficiente sus derechos ARCOP.

En ningún caso, las personas referidas en el presente artículo serán objeto de discriminación en el ejercicio de sus derechos.

Acuse de recibo

Artículo 99. De conformidad con el artículo 31 párrafo noveno de la Ley Estatal, el responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP y entregar el acuse de recibo que corresponda.

El personal de la Unidad de Transparencia del responsable deberá registrar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP que se presenten mediante escrito libre, correo electrónico, formatos establecidos por el sujeto obligado o verbalmente, etc., en la



Plataforma Nacional de Transparencia; asimismo, el acuse de recibo que emita la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá ser remitido a la persona solicitante con la finalidad de que conozca el número de folio con el que podrá dar seguimiento a su solicitud, fecha de presentación, así como los plazos de respuesta aplicables.

En caso de que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP en escrito libre se presente directamente ante una unidad administrativa distinta a la Unidad de Transparencia del responsable, la unidad administrativa deberá remitir la solicitud a la Unidad de Transparencia a más tardar al día siguiente de su presentación.

Para tal efecto, la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP se tendrá por recibida en la fecha en que fue presentada en la unidad administrativa del responsable. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Estatal.

Prevención a la persona titular

Artículo 100. En el caso de que la información proporcionada por la persona titular en su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP sea insuficiente para atenderla por no satisfacer alguno de los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley Estatal, o bien, no se acompañe copia simple de los documentos a que se refieren los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 de los presentes Lineamientos y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, deberá prevenir a la persona titular, por una sola vez, dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al que recibió la solicitud, para que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma.

La persona titular contará con un plazo de diez días hábiles para atender la prevención, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el responsable para dar respuesta a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, por lo que el cómputo de dicho plazo se reiniciará al día siguiente del desahogo de la prevención por parte de la persona titular.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención por parte de la persona titular, se tendrá por no presentada la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP.



Turno de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 101. La Unidad de Transparencia del responsable deberá turnar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP admitidas de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal, los presentes Lineamientos y el Manual de Tramitación de Solicitudes ARCOP a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la o las unidades administrativas que conforme a sus atribuciones, facultades, competencias o funciones puedan o deban poseer los datos personales sobre los que versen las solicitudes, atendiendo a la normatividad que les resulte aplicable.

Gratuidad del ejercicio de derechos ARCOP

Artículo 102. El ejercicio de los derechos ARCOP deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme la normatividad que resulte aplicable, o bien, cuando la persona solicitante no proporcione un medio de almacenamiento a través del cual se le entregue la copia de los datos en un formato estructurado y comúnmente utilizado. La reproducción de los datos personales en copias simples será gratuita cuando no excedan de veinte hojas, o bien, las primeras veinte hojas reproducidas.

Respuesta del responsable y plazo para emitirla

Artículo 103. La respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP debe emitirse por el responsable en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud y deberá señalar:

- I. Los costos de reproducción, certificación y/o envío de los datos personales o de las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCOP que, en su caso, correspondan;
- II. El plazo que tiene la persona titular para realizar el pago, el cual no podrá ser mayor de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se notifique la repuesta a que hace referencia en el presente artículo; señalando que una vez que se realice el pago, deberá remitir copia del recibo, con la identificación del número de folio de la solicitud correspondiente, a más tardar al día siguiente de realizarse el pago, a través del medio que señaló para oír y recibir notificaciones, o bien, presentando personalmente una copia ante la Unidad de Transparencia del responsable, y
- III. El derecho que le asiste a la persona titular para interponer un recurso de revisión ante el Instituto, en caso de inconformidad por la respuesta recibida.



La respuesta adoptada por el responsable podrá ser notificada a la persona titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, de la identidad y personalidad de quien le represente, de manera presencial en su Unidad de Transparencia, por la Plataforma Nacional o bien, en las oficinas que tenga habilitadas para tal efecto, o por correo certificado, en cuyo caso no procederá la notificación a través de representante para estos últimos medios.

Plazo para hacer efectivos los derechos ARCOP

Artículo 104. En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCOP, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que se hubiere notificado la respuesta a la persona solicitante.

Previo a hacer efectivo el ejercicio de los derechos ARCOP, el responsable deberá acreditar la identidad de la persona titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe su representante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley Estatal y 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 94 de los presentes Lineamientos, así como verificar la realización del pago de los costos de reproducción, envío o certificación que, en su caso, se hubieren establecido.

Cuando la solicitud se hubiere presentado directamente en la Unidad de Transparencia de manera presencial, la acreditación de la identidad de la persona titular y, en su caso, la identidad y personalidad de quien actúe en su representación a que se refiere el párrafo anterior, se deberá llevar a cabo mediante la presentación de los documentos originales que correspondan, debiendo dejar asentada esta situación en la constancia que acredite el acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad de los datos personales, según corresponda.

Cuando la persona titular y, en su caso, la persona que le represente, hubieren acreditado su identidad y la personalidad de esta última presencialmente ante la Unidad de Transparencia del responsable levantando una constancia de tal situación, la respuesta a su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP podrá ser notificada a través de los medios electrónicos que determine la persona titular.

Envío de datos personales o constancias por correo certificado

Artículo 105. Sólo procederá el envío por correo certificado de los datos personales o de las constancias del ejercicio efectivo de los derechos ARCOP, cuando la solicitud sea presentada personalmente por la persona titular ante el responsable, no medie

representación alguna, y no se trate de personas menores de edad o de datos personales de fallecidos.

Envío de datos personales o constancias por medios electrónicos

Artículo 106. Sólo procederá el envío por medios electrónicos de los datos personales o de las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCOP, cuando la persona titular hubiere acreditado fehacientemente su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante mediante cualquier mecanismo en los términos previstos en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

La Unidad de Transparencia del responsable deberá dejar constancia de la acreditación de la identidad de la persona titular y, en su caso, de quien le represente, a que se refiere el párrafo anterior.

Disponibilidad de los datos personales o constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos

Artículo 107. La Unidad de Transparencia del responsable deberá tener a disposición de la persona titular y, en su caso, de quien le represente, los datos personales en el medio de reproducción solicitado y/o las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCOP durante un plazo máximo de sesenta días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se hubiere notificado la respuesta de procedencia a la persona solicitante.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá dar por concluida la atención a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP y proceder a la destrucción del material en el que se reprodujeron los datos personales o de las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCOP.

Lo anterior, dejando a salvo el derecho que le asiste a la persona titular de presentar una nueva solicitud de derechos ARCOP ante el responsable.

Causales de improcedencia del ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 108. Cuando el responsable niegue el ejercicio de los derechos ARCOP por actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 34 de la Ley Estatal, así como 9 y 23 de los Lineamientos de portabilidad, la respuesta deberá constar en una resolución de su Comité de Transparencia que confirme la improcedencia del ejercicio de los derechos ARCOP; el responsable deberá informar a la persona solicitante el motivo de su



determinación en el plazo de hasta veinte días hábiles a que refiere el primer párrafo del artículo 30 de la Ley Estatal y, por el mismo medio que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.

Incompetencia notoria y parcial del responsable

Artículo 109. Cuando la Unidad de Transparencia del responsable determine la notoria incompetencia de éste para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, deberá comunicar tal situación a la persona solicitante en el plazo de tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y, en su caso, orientarle con el responsable competente, sin que sea necesario una resolución del Comité de Transparencia que confirme la notoria incompetencia.

Si el responsable es competente para atender parcialmente la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, deberá dar respuesta en el ámbito de su respectiva competencia dentro del plazo de veinte días hábiles a que se refiere el artículo 30 de la Ley Estatal y de conformidad con dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos, debiendo declarar la incompetencia ante Comité de Transparencia cuando la respuesta se otorgue posterior al tercer día hábil, en términos de la notoria incompetencia.

Inexistencia de los datos personales

Artículo 110. La resolución del Comité de Transparencia a que se refiere el artículo 32 segundo párrafo de la Ley Estatal, deberá contar con los elementos mínimos que permitan a la persona titular tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, así como señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y la unidad administrativa competente de contar con los datos personales.

Reconducción de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 111. En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP corresponde a un derecho diferente de los previstos en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, el personal de la Unidad de Transparencia deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento de la persona titular dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, dejando a salvo los requisitos y plazos establecidos en la vía correcta conforme a la normatividad que resulte aplicable.



Trámites específicos

Artículo 112. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCOP, el responsable deberá informar a la persona titular sobre la existencia del mismo para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir la respuesta del responsable, decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien, a través del procedimiento establecido en la Ley Estatal y en los presentes Lineamientos.

En caso de que la persona titular no señale manifestación alguna, se entenderá que ha elegido esta última vía.

Tramitación de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 113. El responsable podrá establecer los plazos y los procedimientos internos que considere convenientes para recibir, gestionar y dar respuesta a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP, observando en todo momento, los requisitos, condiciones, plazos y términos previstos en la Ley General, la Ley Estatal, los presentes Lineamientos, así como los Lineamientos de portabilidad.

Ampliación del plazo de respuesta para atender la solicitud para el ejercicio de derechos ARCOP

Artículo 114. En caso de que el responsable requiera un plazo mayor de veinte días hábiles para dar respuesta a la solicitud ARCOP, la unidad administrativa deberá solicitar mediante oficio al Comité de Transparencia, fundando y motivando las razones por las cuales requiere un plazo adicional.

El Comité de Transparencia podrá conceder la ampliación del plazo de respuesta por una sola ocasión y, por un máximo de diez días hábiles.

Se deberá notificar la ampliación del plazo de respuesta a la persona titular, dentro de los veinte días hábiles originales, adjuntando el acta y la resolución del Comité de Transparencia.

Negativa para la tramitación de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 115. Cuando alguna unidad administrativa del responsable se negare a colaborar con la Unidad de Transparencia en la atención de las solicitudes para el ejercicio de los



derechos ARCOP, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

Si persiste la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento del Comité de Transparencia para que, a su vez, dé vista al órgano interno de control, contraloría o instancia equivalente y, en su caso, dé inicio el procedimiento de responsabilidad administrativo que corresponde.

Inconformidad de la persona titular por la respuesta recibida o falta de ésta

Artículo 116. La persona titular y, en su caso, quien le represente, podrán presentar un recurso de revisión ante el Instituto por la respuesta recibida o falta de respuesta del responsable.

Cumplimiento de las obligaciones para el ejercicio de los derechos ARCOP

Artículo 117. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, recaerá, en todo momento, en el responsable.

CAPÍTULO II

DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN

Acceso a datos personales

Artículo 118. La obligación de acceso a los datos personales se dará por cumplida cuando el responsable ponga a disposición de la persona titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, de la identidad y personalidad de quien le represente, los datos personales a través de consulta directa, en el sitio donde se encuentren, o mediante la expedición de copias simples, copias certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos, o cualquier otra tecnología que determine la persona titular, dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 30 de la Ley Estatal y de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos, así como previa acreditación del pago de los derechos correspondientes.

Rectificación de datos personales

Artículo 119. La obligación de rectificar los datos personales se dará por cumplida cuando el responsable notifique a la persona titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, de la identidad y personalidad de quien le represente, una constancia que acredite la corrección solicitada, dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 30

de la Ley Estatal y de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos.

En la constancia a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá señalar, al menos, el nombre completo de la persona titular, los datos personales corregidos, así como la fecha a partir de la cual fueron rectificadas los datos personales en sus registros, archivos, sistemas de información, expedientes, bases de datos o documentos en su posesión.

Cancelación de datos personales

Artículo 120. La obligación de cancelar los datos personales se dará por cumplida cuando el responsable notifique a la persona titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, de la identidad y personalidad de quien le represente, una constancia que señale:

- I. Los documentos, bases de datos personales, archivos, registros, expedientes y/o sistemas de tratamiento donde se encuentren los datos personales objeto de cancelación;
- II. El periodo de bloqueo de los datos personales, en su caso;
- III. Las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico implementadas durante el periodo de bloqueo, en su caso, y
- IV. Las políticas, métodos y técnicas utilizadas para la supresión definitiva de los datos personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima.

El responsable deberá notificar a la persona titular la constancia a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 30 de la Ley Estatal y de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos.

Oposición de datos personales

Artículo 121. La obligación de cesar en el tratamiento de los datos personales se dará por cumplida cuando el responsable notifique a la persona titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, de la identidad y personalidad de quien le represente, una constancia que señale dicha situación dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 30 de la Ley Estatal y de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO III DE LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

Portabilidad de datos personales

Artículo 122. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, la persona titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos personales objeto de tratamiento, en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.

Cuando la persona titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento automatizado, a otro sistema, en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.

Para garantizar el ejercicio del derecho de portabilidad de datos personales, el responsable deberá observar los requisitos, plazos, condiciones, términos y procedimientos establecidos en el Capítulo V de la Ley Estatal, el Capítulo I del Título Tercero de los presentes Lineamientos, así como lo dispuesto en Los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Procedencia de la portabilidad de los datos personales

Artículo 123. Cuando los datos personales se encuentren en un formato estructurado y comúnmente utilizado, procederá la portabilidad de los datos personales si se actualiza cada una de las siguientes condiciones:

- I. El tratamiento se efectúe por medios automatizados o electrónicos y en un formato estructurado y comúnmente utilizado;
- II. Los datos personales de la persona titular se encuentren en posesión del responsable o de las personas encargadas;
- III. Los datos personales conciernan a la persona titular, o bien, a personas físicas vinculadas a una persona fallecida que tengan un interés jurídico;
- IV. La persona titular hubiere proporcionado directamente al responsable sus datos personales, de forma activa y consciente, lo cual incluye los datos personales



obtenidos en el contexto del uso, la prestación de un servicio o la realización de un trámite, o bien, aquellos proporcionados por la persona titular a través de un dispositivo tecnológico, y

- V. La portabilidad de los datos personales no afecte los derechos y libertades de terceras personas.

Además de las condiciones señaladas anteriormente, cuando se trate de transmisiones de datos personales en un formato estructurado y comúnmente utilizado, la portabilidad de los datos personales será procedente cuando exista una relación jurídica entre el responsable receptor y la persona titular; se cumpla con una disposición legal, o bien, la persona titular pretenda ejercer algún derecho.

TÍTULO CUARTO

RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO

CAPÍTULO ÚNICO

DEL ENCARGADO

Obligación general del encargado

Artículo 124. De acuerdo a lo previsto en el artículo 4 fracción XIII de la Ley Estatal, el encargado es un prestador de servicios que realiza actividades de tratamiento de datos personales a nombre y por cuenta del responsable, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio.

El encargado será corresponsable por las vulneraciones de seguridad ocurridas en el tratamiento de datos personales que efectúe a nombre y por cuenta del responsable.

Formalización de la prestación de servicios del encargado

Artículo 125. La relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido.

En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberán prever, al menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el encargado:

- I. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable;
- II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable;
- III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables;
- IV. Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus instrucciones;
- V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;
- VI. Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con el responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos personales;
- VII. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad competente;
- VIII. Permitir al Instituto o al responsable realizar verificaciones en el lugar o establecimiento donde lleva a cabo el tratamiento de los datos personales;
- IX. Colaborar con el Instituto en las investigaciones previas y verificaciones que lleve a cabo en términos de lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, proporcionando la información y documentación que se estime necesaria para tal efecto; y,
- X. Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.

Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de datos personales no deberán contravenir las disposiciones contempladas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, así como lo establecido en el aviso de privacidad correspondiente.

Proveedores de servicios de cómputo en la nube

Artículo 126. Los proveedores de servicios de cómputo en la nube a que se refiere el artículo 4 fracción VI de la Ley Estatal, para efectos de dicho ordenamiento y de los presentes Lineamientos tendrán el carácter de encargados.

En caso de que, en la contratación de servicios de cómputo en la nube y otras materias, el responsable tenga la posibilidad de convenir con el proveedor las condiciones y términos de este tipo de servicios que impliquen un tratamiento de los datos personales, en el

contrato o instrumento jurídico que suscriban se deberán prever, al menos, las cláusulas generales a que se refiere el artículo 125 de los presentes Lineamientos.

Lo anterior, no exime al responsable de observar lo previsto en los artículos 63 y 64 de la Ley General.

Incumplimiento de las obligaciones del encargado

Artículo 127. En términos de lo dispuesto en el artículo 125 de los presentes Lineamientos, en caso de que el encargado incumpla las obligaciones contraídas con el responsable y decida y determine, por sí mismo, los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable en función de su naturaleza pública o privada.

TÍTULO QUINTO TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES CAPÍTULO ÚNICO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES

Condiciones generales de las transferencias de datos personales

Artículo 128. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 11 fracción II y 37 de la Ley Estatal y, deberá ser informada al titular en el aviso de privacidad, limitando el tratamiento de los datos personales transferidos a las finalidades que la justifiquen.

Por regla general, el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será tácito, salvo que una ley exija al responsable recabar el consentimiento expreso de la persona titular para la transferencia de sus datos personales.

El responsable transferente deberá comunicar al destinatario o receptor de los datos personales el aviso de privacidad, conforme al cual se obligó a tratar los datos personales frente a la persona titular.



Medios para solicitar el consentimiento expreso de la persona titular para la transferencia de sus datos personales

Artículo 129. Cuando la transferencia de datos personales requiera del consentimiento expreso de la persona titular, el responsable podrá establecer cualquier medio que le permita obtener esta modalidad del consentimiento de manera previa a la transferencia de sus datos personales, siempre y cuando el medio habilitado sea de fácil acceso y con la mayor cobertura posible, considerando el perfil de las personas titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con ellas.

Transferencias nacionales de datos personales

Artículo 130. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos personales asumirá el carácter de responsable conforme a la legislación que en esta materia le resulte aplicable, atendiendo su naturaleza jurídica, pública o privada, y deberá tratar los datos personales atendiendo a dicha legislación y a lo convenido en el aviso de privacidad que le será comunicado por el responsable transferente.

Transferencias internacionales de datos personales

Artículo 131. El responsable sólo podrá transferir datos personales fuera del territorio nacional, cuando el receptor o destinatario se obligue a proteger los datos personales conforme a los principios, deberes y demás obligaciones similares o equiparables a las previstas en la Ley General, la Ley Estatal y demás normatividad mexicana en la materia, así como a los términos previstos en el aviso de privacidad que le será comunicado por el responsable transferente.

Solicitud de opinión sobre transferencias internacionales de datos personales

Artículo 132. En caso de considerarlo necesario, el responsable podrá solicitar la opinión del Instituto respecto aquellas transferencias internacionales de datos personales que pretenda efectuar en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos de acuerdo con lo siguiente:

- I. El responsable deberá presentar su solicitud directamente en el domicilio del Instituto, o bien, a través de cualquier otro medio que se habilite para tal efecto;
- II. La solicitud deberá describir las generalidades y particularidades de la transferencia internacional de datos personales que se pretende efectuar, con especial énfasis en las finalidades que motivan la transferencia; el o los destinatarios de los datos personales que, en su caso, se pretenda transferir; el fundamento legal que, en su caso, obligue al responsable a transferir los datos personales; los datos personales

que se pretendan transferir; las categorías de titulares involucrados; la tecnología o medios utilizados para, en su caso, efectuar la transferencia; las medidas de seguridad aplicables; las cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico que se suscribiría con el destinatario o receptor, en caso de que resulte exigible, así como cualquier otra información relevante para el caso concreto;

- III. La solicitud podrá ir acompañada de aquellos documentos que el responsable considere conveniente hacer del conocimiento del Instituto;
- IV. Si el Instituto considera que no cuenta con la suficiente información para emitir su opinión técnica, deberá requerir al responsable, por una sola ocasión y en un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud, la información adicional que considere pertinente;
- V. El responsable contará con un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del requerimiento de información adicional, para proporcionar mayores elementos al Instituto con el apercibimiento de que en caso de no cumplir se tendrá por no presentada su consulta;
- VI. El requerimiento de información adicional tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para emitir su opinión técnica, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente al de a su desahogo;
- VII. El Instituto deberá emitir la opinión técnica que corresponda en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la consulta, el cual no podrá ampliarse; y,
- VIII. Si el Instituto no emite su opinión técnica en el plazo señalado en la fracción anterior del presente artículo, se entenderá que su opinión no es favorable respecto a la transferencia internacional de datos personales que se pretende efectuar.

Cumplimiento de las obligaciones en materia de transferencias de datos personales

Artículo 133. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, recaerá, en todo momento, en el responsable.

TÍTULO SEXTO

ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO I

DE LOS ESQUEMAS DE MEJORES PRÁCTICAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Parámetros de los esquemas de mejores prácticas

Artículo 134. En los parámetros de esquemas de mejores prácticas a que se refiere el artículo 39 de la Ley Estatal, el Instituto deberá definir, de manera enunciativa más no limitativa, los alcances, objetivos, características y conformación del sistema de mejores prácticas en materia de protección de datos personales, el cual incluirá el modelo de certificación, así como los requisitos mínimos que deben satisfacer estos esquemas para su evaluación, validación o reconocimiento del Instituto e inscripción en el registro correspondiente.

Evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

Artículo 135. En la elaboración, presentación y valoración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales a que se refiere el artículo 41 de la Ley Estatal, así como en la emisión de las recomendaciones no vinculantes, el responsable y el Instituto, según corresponda, deberán observar lo dispuesto en las disposiciones que para tal efecto emita el Sistema Nacional.

Para efectos de los presentes Lineamientos y en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General, el responsable estará en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales cuando concorra cada una de las siguientes condiciones:

- I. Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar, entendidos como el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener éstos para una tercera persona no autorizada para su posesión o uso en función de la sensibilidad de los datos personales; las categorías de titulares involucrados; el volumen total de los datos personales tratados; la cantidad de datos personales que se tratan por cada titular; la intensidad o frecuencia del tratamiento, o bien, la realización de cruces de datos personales con múltiples sistemas o plataformas informáticas;
- II. Se traten datos personales sensibles a los que se refiere el artículo 4 fracción IX de la Ley Estatal, entendidos como aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; y,
- III. Se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales a las que se refiere el artículo 4 fracción XXVII de la Ley Estatal, según corresponda, entendidas como cualquier comunicación de datos personales, dentro o fuera del territorio

mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado, considerando con especial énfasis, de manera enunciativa más no limitativa, las finalidades que motivan éstas y su periodicidad prevista; las categorías de titulares involucrados; la categoría y sensibilidad de los datos personales transferidos; el carácter nacional y/o internacional de los destinatarios o terceros receptores y la tecnología utilizada para la realización de éstas.

Presentación de la Evaluación de impacto ante el Instituto

Artículo 136. Los sujetos obligados que realicen una Evaluación de impacto en la protección de datos personales, a que se refiere el artículo 41 de la Ley Estatal, deberán presentarla ante el Instituto, treinta días hábiles anteriores a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, a efecto de que emita las recomendaciones no vinculantes correspondientes.

El plazo para la emisión de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior será dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente a la presentación de la evaluación.

CAPÍTULO II DE LA PERSONA OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Designación del oficial de protección de datos personales

Artículo 137. Los responsables deberán designar a un oficial de protección de datos personales, el cual formará parte de la Unidad de Transparencia.

La persona designada como oficial de protección de datos deberá contar con la jerarquía o posición dentro de la organización del responsable que le permita implementar políticas transversales en esta materia.

La persona oficial de protección de datos personales deberá ser designada atendiendo a sus conocimientos, cualidades profesionales, experiencia en la materia, y, en su caso, a la o las certificaciones con que cuente en materia de protección de datos personales.

Funciones de la persona oficial de protección de datos personales

Artículo 138. La persona oficial de protección de datos personales tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Asesorar al Comité de Transparencia respecto a los temas que sean sometidos a su consideración en materia de protección de datos personales;
- II. Proponer al Comité de Transparencia políticas, programas, acciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento de la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos;
- III. Implementar políticas, programas, acciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento de la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, previa autorización del Comité de Transparencia;
- IV. Asesorar permanentemente a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales; y,
- V. Las demás que determine el responsable y la normatividad que resulte aplicable.

Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 47 párrafo segundo de la Ley Estatal.

TÍTULO SÉPTIMO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES DEL RECURSO DE REVISIÓN

Principios rectores

Artículo 139. En la sustanciación del recurso de revisión el Instituto deberá dar cumplimiento a los requisitos de fundamentación y motivación, así como regirse por los siguientes principios:

- I. **Legalidad:** actuando al margen de lo que estrictamente le está permitido por la Ley Estatal, de tal manera que no realice conductas contrarias a sus atribuciones expresamente conferidas;
- II. **Certeza jurídica:** dando a conocer a las partes, de manera previa, con claridad y seguridad, las reglas, requisitos y procedimientos a que se encuentra sujeta su actuación en la toma de cualquier decisión;
- III. **Independencia:** emitiendo decisiones en estricto apego a la normatividad que le resulta aplicable, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias, intereses, presiones o insinuaciones de terceros;
- IV. **Imparcialidad:** abstenerse de cualquier influencia de terceros y/o de las partes en las decisiones, procesos y procedimientos sometidos a su potestad, o bien, de juicios o valoraciones subjetivas;



- V. **Eficacia:** actuando conforme a una cultura de servicio orientada al logro de sus resultados, mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos y la obtención del mayor resultado con el esfuerzo realizado;
- VI. **Objetividad:** realizando sus funciones por las razones señaladas en la legislación que le resulta aplicable y no por valoraciones subjetivas;
- VII. **Profesionalismo:** actuando de manera responsable y seria, de tal manera que el ejercicio de sus funciones se cumpla con eficiencia, y
- VIII. **Transparencia:** su actuación, en el ejercicio de funciones públicas, se haga del conocimiento público en atención a la interpretación más amplia y extensiva del derecho a la protección de datos personales.

Acreditación de la identidad y personalidad de la persona que funge como representante

Artículo 140. Cuando la persona titular interponga un recurso de revisión a través de un representante, ambos deberán acreditar su identidad y la personalidad de este último conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Estatal.

Acreditación de personas menores de edad cuando sus padres ejercen la patria potestad

Artículo 141. Cuando la persona titular sea menor de edad y sus padres sean los que ejerzan la patria potestad y los que presenten el recurso de revisión, además de acreditar la identidad de la persona menor de edad, se deberá acreditar la identidad y representación del progenitor que interpone el recurso mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento de la persona menor de edad; y,
- II. Documento de identificación oficial del progenitor que interpone el recurso de revisión.

Para efectos del presente Capítulo, la identidad de las personas menores de edad se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, credenciales expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte, entre otros documentos utilizados para tal fin.

Acreditación de personas menores de edad cuando una persona distinta a sus padres ejerce la patria potestad

Artículo 142. Cuando la persona titular sea menor de edad y su patria potestad la ejerza una persona distinta a los padres y sea ésta quien presente el recurso de revisión, deberá

acreditar la identidad de la persona menor de edad y su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento de la persona menor de edad;
- II. Documento legal que acredite el ejercicio de la patria potestad; y,
- III. Documento de identificación oficial de quien ejerce la patria potestad.

Acreditación de personas menores de edad cuando una persona tutora ejerce la patria potestad

Artículo 143. Cuando la persona titular sea menor de edad y el recurso de revisión lo presente quien ejerce su tutela, ésta deberá acreditar la identidad de la persona menor de edad y su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento de la persona menor de edad;
- II. Documento legal que acredite el ejercicio de la tutela; y,
- III. Documento de identificación oficial del tutor.

Acreditación de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley

Artículo 144. Cuando la persona titular se encuentre en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, quien ejerza su tutela deberá acreditar la identidad de la persona titular y su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Documento de identificación oficial de la persona en estado de interdicción o incapacidad;
- II. Instrumento legal de designación de la tutela; y,
- III. Documento de identificación oficial de la persona tutora.

Para efectos del presente Capítulo, la identidad de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, pasaporte o cualquier otro documento o identificación oficial expedida para tal fin.

Recurso de revisión de personas vinculadas a fallecidos

Artículo 145. En términos del artículo 51 de la Ley Estatal, la interposición de un recurso de revisión de datos personales concernientes a una persona fallecida, podrá realizarla la persona que acredite su identidad en los términos previstos en los artículos 49 y 50 de la



Ley Estatal y tener un interés legítimo o jurídico a través del documento respectivo, así como el acta de defunción del fallecido.

Se entenderá por interés legítimo aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico en favor del peticionario derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud, o de cualquier otra.

Para efectos de la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá por interés jurídico aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento de la persona titular, pretenda ejercer los derechos ARCOP de ésta, para el reconocimiento de derechos sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya tenido con ella, el cual se acreditará en términos de las disposiciones legales aplicables.

Pueden alegarlo, de manera enunciativa más no limitativa, el albacea, las personas herederas, las personas legatarias, o los familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, lo que se acreditará con copia simple del documento delegatorio pasado ante la fe de notario público o suscrito ante dos personas testigos.

En el supuesto de que la persona titular sea menor de edad, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción, así como la identificación de la persona menor de edad y de quien ejercía su patria potestad y/o tutela.

En el supuesto de que la persona titular se encontrará en estado de interdicción o incapacidad declarada por Ley, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción, la identificación de la persona fallecida y de quien ejercía la tutela, así como el instrumento legal de designación del tutor.

Medios para interponer el recurso de revisión

Artículo 146. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Estatal, el Instituto podrá recibir los recursos de revisión través de cualquiera de los siguientes medios:

- I. Por escrito libre o en el formato aprobado por el Instituto presentado en su domicilio;
- II. Por medio de la Unidad de Transparencia del responsable cuya respuesta es objeto del recurso de revisión;



- III. Por correo electrónico o la Plataforma Nacional, o bien, a través de cualquier otro sistema electrónico que para tal efecto se autorice;
- IV. Por correo certificado con acuse de recibo; o,
- V. Cualquier otro medio que determine el Instituto.

Se presumirá que la persona titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones.

Cuando el recurso de revisión sea presentado ante el responsable, este deberá remitirlo al Instituto en un plazo no mayor al día hábil siguiente de su presentación. Cuando el recurso de revisión se presente ante el Instituto por un medio distinto a la Plataforma Nacional, la Secretaría Ejecutiva, con apoyo de la Coordinación de la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá registrar el recurso de revisión y remitir el acuse a la persona titular, ahora recurrente, para su seguimiento.

El Instituto deberá prever mecanismos accesibles para que las personas con discapacidad y las personas hablantes de una lengua indígena puedan interponer recursos de revisión, tales como, contar con lugares de estacionamiento para personas con discapacidad; la asistencia de intérpretes oficiales de lenguas indígena; las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo, o el apoyo en la lectura de documentos, entre otros.

Tipos de pruebas y reglas para su ofrecimiento

Artículo 147. En la sustanciación del recurso de revisión, la persona titular, el responsable o el tercero interesado, podrán ofrecer las pruebas señaladas en el artículo 53 de la Ley Estatal, dentro de los primeros diez días hábiles a partir de la notificación del acuerdo de admisión, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

En el caso de ofrecer la prueba pericial, se deberá señalar el nombre completo, domicilio y especialidad en la ciencia o arte del perito, así como exhibir el interrogatorio que deberá desahogar éste, o bien, los puntos sobre los que versará el peritaje.

Los peritos propuestos deberán acreditar que cuentan con título en la ciencia, arte o industria, siempre y cuando la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados.



En caso contrario o estando reglamentada la profesión o arte de que se trate no hubiere peritos en el lugar, se podrá nombrar a cualquier persona entendida sin que sea necesario que cuente con un título.

El costo del perito estará a cargo de la parte que lo propone.

En el caso de ofrecer la prueba testimonial, se deberá señalar el nombre completo y domicilio de las personas testigos para efectos de ser llamados a testificar, precisando expresamente si se requiere que el Instituto realice la citación correspondiente o, en su caso, el compromiso del oferente para presentar a las personas testigos en la diligencia correspondiente.

En el caso de ofrecer la prueba confesional, se deberá indicar el nombre completo y domicilio de la persona que tendrá que absolver las posiciones que correspondan, así como exhibir el pliego de las mismas que contendrá el interrogatorio.

El ofrecimiento de la documental pública y privada; de inspección; de imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología; la presunción legal y humana y todas aquellas que no sean contrarias a derecho, no requerirá de formalidades especiales.

A falta de disposición expresa en el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas se aplicará de manera supletoria las disposiciones previstas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

Admisión de pruebas

Artículo 148. Para determinar la admisión de la prueba confesional, testimonial y pericial, el Instituto deberá observar lo dispuesto en el artículo anterior de los presentes Lineamientos.

En el caso de la prueba pericial, el Instituto deberá dar vista a la contraparte para que manifieste si acepta al perito señalado por la parte promovente, en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

Si la contraparte está de acuerdo con el perito de la parte promovente, el Instituto deberá señalar día y hora para que el perito acepte y proteste el cargo y, en su caso, el día para

que el perito lleve a cabo el peritaje correspondiente, previo a la audiencia de desahogo de pruebas.

En caso de que la contraparte no acepte el perito ofrecido por la parte promovente, el Instituto deberá nombrar un tercer perito, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de conocer la negativa de la contraparte, señalando día y hora para que el perito acepte y proteste el cargo y, en su caso, el día para que el perito lleve a cabo el peritaje correspondiente, previo a la audiencia de desahogo de pruebas cuyo costo correrá a cargo de las partes.

Cuando ambas partes en el recurso de revisión hubieren ofrecido la prueba pericial, el Instituto deberá dar vista a ambas partes para que, en un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, manifiesten la designación de un único perito. En este supuesto, el Instituto deberá citar al perito designado para que acepte y proteste el cargo y, en su caso, el día para que el perito lleve a cabo el peritaje correspondiente, previo a la audiencia de desahogo de pruebas.

Reglas para la audiencia de desahogo de pruebas

Artículo 149. En la audiencia de desahogo de pruebas que, en su caso, se efectúe durante la sustanciación del recurso de revisión, el Instituto deberá observar lo siguiente:

- I. Tratándose de la prueba confesional, se deberá abrir el pliego de posiciones y calificar que las posiciones estén formuladas en términos claros y precisos y no sean insidiosas, procurando que cada una no contenga más de un hecho y éste sea propio del que declara; se tendrá por confeso cuando el absolvente no se presente al desahogo de la prueba sin causa justificada; se niegue a declarar; insista en no responder afirmativa o negativamente, o manifieste que ignora los hechos;
- II. Con respecto a la prueba testimonial, se tendrá la más amplia facultad para hacer a las personas testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos testigos. El interrogatorio se deberá realizar de manera verbal y directamente por las partes o sus representantes al testigo. Las personas servidoras públicas o quienes lo hayan sido, solo serán llamados a declarar cuando el Instituto lo juzgue indispensable para la resolución del recurso de revisión; y,
- III. Para el desahogo de prueba pericial, se deberá verificar que obre en constancias el dictamen rendido por el perito.



El desahogo de la documental pública y privada; de inspección; de imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología; la presunción legal y humana y todas aquellas pruebas que no sean contrarias a derecho, no requerirá de formalidades especiales por la propia naturaleza de las mismas.

Valoración de las pruebas

Artículo 150. El Instituto gozará de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas durante la sustanciación del recurso de revisión y deberá determinar el valor de las mismas conforme a lo siguiente:

- I. Los documentos públicos harán prueba plena de los hechos legalmente emitidos por la autoridad. Si éstos contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos particulares, sólo harán prueba plena respecto a que tales declaraciones o manifestaciones se realizaron ante la autoridad, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado;
- II. El documento privado se valorará como prueba respecto de los hechos mencionados en él y relacionados con la parte que lo ofrece;
- III. El reconocimiento o inspección hará prueba plena cuando se refiera a puntos que no requieren conocimientos técnicos especiales;
- IV. La prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Instituto, con independencia de que la ciencia, arte o industria se encuentre o no reglamentada;
- V. La prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del Instituto;
- VI. La confesión expresa hará prueba plena cuando se realice por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia y corresponda a hechos, y concerniente a la litis del recurso de revisión.
- VII. La confesión ficta produce el efecto de una presunción, siempre y cuando no existan pruebas que la contradigan;
- VIII. Las fotografías, información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia quedará al prudente arbitrio del Instituto;
- IX. Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario tendrán pleno valor probatorio;
- X. Las demás presunciones legales tendrán el mismo valor, mientras no sean destruidas, y
- XI. Las presunciones restantes quedan al prudente arbitrio del Instituto.



Tratándose de la fracción VIII del presente artículo, las fotografías de personas, lugares, papeles, documentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas y que corresponden a lo representado en ellas para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio del Instituto.

Respecto a la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

Cuando la Ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

Solicitud de informes o documentos

Artículo 151. El Instituto podrá solicitar a la persona titular, al responsable, al tercero interesado y/o cualquier autoridad, en su caso, cualquier información y demás documentos que estime pertinentes guardando la confidencialidad respectiva sobre la información a la que tenga acceso, así como celebrar audiencias de oficio o a solicitud de éstos con el objeto de allegarse de mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos objeto del recurso de revisión.

CAPÍTULO II DE LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN

Plazo para interponer el recurso de revisión

Artículo 152. De conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatal, la persona titular o quien le represente tendrán un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles para interponer el recurso de revisión, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta a la solicitud de los derechos ARCOP.

Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP sin que se haya emitido ésta, la persona titular o quien le represente

podrán interponer el recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes al que haya vencido el plazo para dar respuesta.

Causales de procedencia

Artículo 153. La persona titular o quien le represente podrán interponer un recurso de revisión cuando se actualice alguna de las causales previstas en el artículo 55 de la Ley Estatal.

Escrito del recurso de revisión

Artículo 154. Tratándose del artículo 56 fracción II de la Ley Estatal, en caso de que la persona titular o quien le represente no señale de manera expresa su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir notificaciones, se presumirá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas a través de la Plataforma Nacional y por el mismo medio a través del cual presentó su recurso de revisión o través de los estrados del Instituto.

En su escrito de recurso de revisión, la persona titular o quien le represente podrán exhibir copia de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP que presentó ante el responsable y los documentos anexos a la misma con su correspondiente acuse de recepción, así como las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a consideración del Instituto.

Presentación del recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del responsable

Artículo 155. Cuando la persona titular o quien le represente presenten el recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del responsable que conoció de su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día hábil siguiente de haberlo recibido.

En caso de que el recurso de revisión se presente mediante escrito físico, la Unidad de Transparencia del responsable deberá remitirlo a través de correo postal.

Recepción y turno del recurso de revisión

Artículo 156. Interpuesto un recurso de revisión ante el Instituto, o bien, recibido por la Unidad de Transparencia del responsable que conoció de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, la Secretaría Ejecutiva del Instituto deberá turnarlo a la Ponencia por orden de prelación, a más tardar al día siguiente de su recepción.



Para efectos del presente Capítulo, las funciones conferidas la Ponencia podrán ser realizadas por las personas servidoras públicas que cuenten con facultades conforme a la normatividad que al efecto emita el Pleno del Instituto y que resulte vigente al momento de la sustanciación del recurso de revisión.

Momento de acreditación de la identidad de la persona titular

Artículo 157. El Instituto deberá acreditar la identidad de la persona titular y, en su caso, la identidad y personalidad de quien le represente al momento de interponer el recurso de revisión, para lo cual la persona titular podrá enviar copia simple de su identificación oficial a través de medios electrónicos.

Acuerdo de admisión o prevención

Artículo 158. Recibido el recurso de revisión, la ponencia deberá:

- I. Integrar el expediente del recurso de revisión;
- II. Proceder al estudio y análisis del recurso de revisión con las pruebas y demás elementos manifestados y presentados por la persona titular, y
- III. Emitir un acuerdo fundando y motivando cualquiera de las siguientes determinaciones:
 - a. Requiriendo a la persona titular información adicional en términos de los artículos 61 de la Ley Estatal y del artículo siguiente de los presentes Lineamientos, o
 - b. Admitiendo el recurso de revisión.

La Ponencia deberá emitir el acuerdo a que se refiere la fracción III del presente artículo dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de recibir el recurso de revisión, el cual deberá ser notificado a la persona titular, al responsable y, en su caso, al tercero interesado dentro de los tres días hábiles siguientes.

Acuerdo de prevención a la persona titular

Artículo 159. El acuerdo de prevención se emitirá en aquellos casos en que el escrito de interposición del recurso de revisión no cumpla con alguno de los requisitos previstos en el artículo 56 de la Ley Estatal y la Ponencia no cuente con elementos para subsanarlos.

En este caso, el acuerdo de prevención deberá requerir a la persona titular, por una sola ocasión, la información necesaria para subsanar las omisiones de su escrito de recurso de revisión con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con el requerimiento, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación



del acuerdo, se desechará el recurso de revisión de conformidad con el artículo 61 de la Ley Estatal.

Acuerdo de admisión del recurso de revisión

Artículo 160. Atendiendo lo previsto en el artículo 58 fracción I de la Ley Estatal, en el acuerdo de admisión del recurso de revisión, la Ponencia deberá promover la conciliación entre la persona titular y el responsable, así como poner a su disposición el expediente respectivo del recurso de revisión para que en un plazo máximo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de dicho acuerdo:

- I. Manifiesten por cualquier medio su voluntad de conciliar;
- II. Señalen lo que a su derecho convenga;
- III. Ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes en términos de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley Estatal y 147 de los presentes Lineamientos, y
- IV. Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas, las partes tendrán cinco días hábiles para presentar sus alegatos, de conformidad con los artículos 6 de la Ley Estatal, así como lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

En caso de existir tercero interesado, deberá acreditar su identidad y su carácter como tal, alegar lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas que estime pertinentes en el plazo señalado en el primer párrafo del presente artículo.

La persona titular, el responsable y/o las personas autorizadas podrán consultar los expedientes de los recursos de revisión en horarios y durante todos los días hábiles del año que determine el Instituto.

Etapas de conciliación

Artículo 161. La Ponencia deberá promover, privilegiar y buscar la conciliación entre la persona titular y el responsable. La etapa de conciliación sólo será posible cuando la persona titular y el responsable acuerden someterse a dicho procedimiento.

De acuerdo con el artículo 58 fracción I de la Ley Estatal, la conciliación podrá celebrarse por cualquiera de los siguientes medios:

- I. Presencialmente;
- II. Por medios remotos o locales de comunicación electrónica; o,

III. Cualquier otro medio que determine la Ponencia.

En cualquiera de los medios señalados en las fracciones anteriores, la Ponencia deberá dejar constancia de la existencia de la conciliación para efectos de acreditación.

En la etapa de conciliación deberán observarse los principios de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, flexibilidad y economía.

Conciliación en recursos de revisión de personas menores de edad

Artículo 162. De conformidad con el artículo 58 fracción I de la Ley Estatal, la conciliación no será procedente cuando la persona titular sea menor de edad y se hubiere vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley General o la Ley Estatal, y la Ley para la Protección y Defensa los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, vinculados con la Ley Estatal o la Ley General, salvo que la persona menor de edad cuente con representación legal debidamente acreditada.

Audiencia de conciliación

Artículo 163. Aceptada la conciliación por la persona titular y el responsable, en términos del artículo 58 fracción II de la Ley Estatal, la Ponencia deberá emitir un acuerdo a través del cual señale el lugar o medio, día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación y solicite a éstos los elementos de convicción que consideren pertinentes presentar durante el desarrollo de la audiencia, dicho acuerdo deberá emitirse dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que tenga conocimiento de que la persona titular y el responsable aceptan someterse a la etapa de conciliación.

La audiencia de conciliación deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles siguientes en que la Ponencia recibió la manifestación de voluntad de la persona titular y el responsable para conciliar.

La audiencia de conciliación podrá llevarse a cabo con el representante de la persona titular, siempre y cuando ésta haya manifestado su voluntad para tales efectos.

Ausencia de alguna de las partes a la audiencia de conciliación con justificación

Artículo 164. De acuerdo con el artículo 58 fracción III de la Ley Estatal, si la persona titular o el responsable no acuden a la audiencia de conciliación y justifican su ausencia dentro de los tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha señalada para la



celebración de la audiencia de conciliación, serán convocados por la Ponencia a una segunda audiencia en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de su justificación.

En caso de que la persona titular o el responsable no acudan a esta segunda audiencia, la Ponencia deberá continuar con la siguiente etapa de sustanciación del procedimiento del recurso de revisión conforme lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Ausencia de alguna de las partes a la audiencia de conciliación sin justificación

Artículo 165. De conformidad con el artículo 58 fracción III de la Ley Estatal, cuando la persona titular o el responsable no acudan a la audiencia de conciliación y no justifiquen su ausencia, la Ponencia deberá continuar con la siguiente etapa de sustanciación del procedimiento del recurso de revisión en términos de la Ley General Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Acta de la audiencia de conciliación

Artículo 166. De conformidad con lo señalado en el artículo 58 fracción II de la Ley Estatal, de toda audiencia de conciliación se deberá levantar el acta respectiva, en la cual deberá constar, al menos, lo siguiente:

- I. El número de expediente del recurso de revisión;
- II. El lugar, fecha y hora de celebración de la audiencia de conciliación;
- III. Los fundamentos legales para llevar a cabo la audiencia;
- IV. El nombre completo de la persona titular o su representante, ambos debidamente acreditados;
- V. La denominación del responsable y de la persona servidora pública que haya designado como su representante, esta última debidamente acreditado;
- VI. El nombre o los nombres de las personas servidoras públicas del Instituto que asistieron a la audiencia de conciliación;
- VII. La manifestación de la voluntad de la persona titular y responsable de dirimir sus controversias mediante la celebración de un acuerdo de conciliación;
- VIII. La narración circunstanciada de los hechos ocurridos durante la audiencia de conciliación;
- IX. Los acuerdos adoptados por las partes, en su caso;
- X. El plazo para el cumplimiento de los acuerdos, en su caso; y



- XI. El nombre y firma de la persona conciliadora, las personas servidoras públicas designadas por la Ponencia, la persona titular o su representante, la persona representante del responsable y de todas aquellas personas que intervinieron en la audiencia de conciliación.

En caso de que la persona titular o su representante, o la persona representante del responsable no firmen el acta, se hará constar tal negativa, cuestión que no deberá afectar la validez de la misma ni el carácter vinculante de los acuerdos adoptados, en su caso.

Cuando la audiencia de conciliación se realice por medios remotos, la persona conciliadora deberá hacer del conocimiento de la persona titular y del responsable, que la misma será grabada por el medio que a juicio de la primera se considere conveniente para el único efecto de acreditar la existencia de ésta.

Acuerdo de conciliación

Artículo 167. En términos de los artículos 57 y 58 fracción V de la Ley Estatal, si la persona titular y el responsable llegan a un acuerdo en la etapa de conciliación, éste deberá constar por escrito en el acta de la audiencia de conciliación y tendrá efectos vinculantes.

Cumplimiento del acuerdo de conciliación

Artículo 168. El responsable deberá cumplir el acuerdo de conciliación en el plazo establecido en el acta, el cual se definirá en función del derecho ARCOP a ejercer y de la complejidad técnica, operativa o demás cuestiones involucradas para hacer efectivo el derecho que se trate.

Para tal efecto, el responsable deberá hacer del conocimiento de la Ponencia el cumplimiento del acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, a más tardar al día siguiente de que concluya el plazo fijado para cumplir el acuerdo de conciliación.

En caso de que el responsable no informe sobre el cumplimiento del acuerdo de conciliación en el plazo establecido en el párrafo anterior, se tendrá por incumplido y se reanudará la sustanciación del recurso de revisión.

Efecto del cumplimiento del acuerdo de conciliación

Artículo 169. Cuando el responsable cumpla con el acuerdo de conciliación, la Ponencia deberá emitir un acuerdo de cumplimiento, dentro de los tres días hábiles siguientes



contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la notificación del responsable sobre el cumplimiento del acuerdo de conciliación.

El cumplimiento del acuerdo de conciliación dará por concluida la sustanciación del recurso de revisión y la Ponencia deberá someter a consideración del Pleno del Instituto el proyecto de resolución en la que se proponga el sobreseimiento del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 64 fracción V de la Ley Estatal.

En caso contrario, la Ponencia deberá reanudar el procedimiento.

Acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas

Artículo 170. Si la persona titular o el responsable no hubieren manifestado su voluntad para conciliar, o bien, en la audiencia de conciliación no llegan a un acuerdo, se deberá dar por concluida la etapa de conciliación y la Ponencia deberá dictar un acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas que en su caso hubieren ofrecido, el cual señalará lugar y hora para el desahogo de aquellas pruebas que por su propia naturaleza requieran ser desahogadas en audiencia, y, en su caso, citar a las personas señaladas como testigos.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior deberá ser emitido en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la conclusión de la etapa de conciliación, o bien, del plazo que tienen la persona titular y el responsable para manifestar su voluntad de conciliar.

Para la admisión de las pruebas ofrecidas por la persona titular, el responsable y, en su caso, la persona tercera interesada, la Ponencia deberá observar lo dispuesto en los artículos 149 y 150 de los presentes Lineamientos.

Pruebas supervenientes

Artículo 171. Una vez emitido el acuerdo a que se refiere el artículo anterior, la Ponencia sólo admitirá pruebas supervenientes.

Audiencia de desahogo de pruebas

Artículo 172. En la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 149 de los presentes Lineamientos y la valoración de las mismas, la Ponencia deberá observar las reglas dispuestas en los artículos 147, 148, 149 y 150 del presente ordenamiento.



Ampliación del plazo de resolución del recurso de revisión

Artículo 173. Cuando la Ponencia determine ampliar el plazo a que se refiere el artículo 59 de la Ley Estatal, deberá emitir un acuerdo que funde y motive la causa de la ampliación de dicho plazo dentro de los cuarenta días hábiles que tiene el Instituto para resolver el recurso de revisión, el cual deberá ser notificado a la persona titular, al responsable y, en su caso, a la persona tercera interesada.

Resolución del recurso de revisión

Artículo 174. El Instituto en sus resoluciones establecerá los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días hábiles para el acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad al tratamiento de los datos personales. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Ante la falta de resolución por parte del Instituto se entenderá confirmada la respuesta del responsable.

Manifestación del desistimiento

Artículo 175. Para el caso de que la persona titular se desista del recurso de revisión, deberá manifestar su voluntad de manera expresa, clara e inequívoca de no continuar con la sustanciación y resolución del mismo conforme lo siguiente:

- I. Cuando se hubiere presentado por escrito ante el Instituto, el desistimiento deberá promoverse por escrito con la firma autógrafa de la persona titular;
- II. Cuando el recurso de revisión hubiere sido presentado por correo electrónico, el desistimiento deberá de ser presentado a través de la misma cuenta de correo electrónico por la cual se presentó, o alguna de las cuentas de correo electrónico autorizadas para recibir notificaciones;
- III. Cuando la presentación del recurso de revisión se hubiere efectuado a través de la Plataforma Nacional, el desistimiento deberá realizarse a través de la cuenta de la persona titular, ahora recurrente; o,
- IV. Cuando la persona titular comparezca personalmente ante el Instituto, con independencia del medio a través del cual hubiere presentado el recurso de revisión.

En caso de que la manifestación de su voluntad no se advierta clara e inequívoca, el o la Comisionada ponente podrá requerir a la persona titular que precise su intención de no continuar con la sustanciación y resolución del mismo.



Medios de impugnación de las resoluciones

Artículo 176. De conformidad con el artículo 66 de la Ley Estatal, las resoluciones del Instituto serán vinculantes, definitivas e inatacables para el responsable, en términos de lo dispuesto en los artículos 139, 140, 141, 142 y 143 de la Ley General.

La persona titular podrá impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, o bien, podrá interponer Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

CAPÍTULO III DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE REVISIÓN

Plazo de cumplimiento y prórroga de las resoluciones de los recursos de revisión

Artículo 177. El responsable, a través de la Unidad de Transparencia, dará estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el responsable podrá solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días hábiles del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días hábiles siguientes. Durante este periodo, se suspenderá el plazo que tiene el responsable para dar cumplimiento a la resolución, el cual se reanudará a partir del día siguiente a aquél que el Instituto le notifique su determinación.

Rendición de informe de cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión

Artículo 178. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el responsable deberá informar al Instituto sobre el cumplimiento de la resolución.

El Instituto, a través de Coordinación de Asuntos Jurídicos, deberá verificar de oficio el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión y, a más tardar al día hábil siguiente



de recibir el informe, dar vista a la persona titular para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes manifieste lo que a su derecho convenga.

Si dentro del plazo señalado la persona titular manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

Procedimiento de verificación del cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión

Artículo 179. El Instituto, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de las manifestaciones de la persona titular sobre todas las causas que ésta manifieste, así como del resultado de la verificación que hubiere realizado.

Si el Instituto, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, considera que se dio cumplimiento a la resolución deberá emitir un acuerdo de cumplimiento y ordenar el archivo del expediente.

En caso contrario, el Instituto deberá:

- I. Emitir un acuerdo de incumplimiento;
- II. Notificar al superior jerárquico de la persona servidora pública encargada de dar cumplimiento, para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente que surta efectos la notificación, se dé cumplimiento a la resolución bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una medida de apremio en los términos señalados en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades administrativas de la persona servidora pública inferior, y
- III. Determinar las medidas de apremio que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título de los presentes Lineamientos.

Cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión relativas al derecho de acceso a datos personales

Artículo 180 Cuando se trate de una resolución en la que el Instituto determine que el responsable deberá otorgar acceso a los datos personales de la persona titular, o en su



caso, de quien actúe en su representación, este deberá hacerlo previa acreditación de la titularidad.

El responsable podrá poner a disposición del Instituto los datos personales correspondientes en sobre cerrado, para que sea este último el encargado de ponerlos a disposición de la persona titular, o en su caso, de quien le represente, previa acreditación de la titularidad, dejando constancia de ello en el expediente. El Instituto deberá emitir un acuerdo donde informe a la persona titular los días y horas en que podrá acceder a la información, así como el plazo que tendrá para ejercer el derecho y, en caso de que la persona no acudiere al Instituto, la información será devuelta al responsable a través de notificación personal a la persona titular de la Unidad de Transparencia.

La Ponencia deberá guardar estricta confidencialidad de la información puesta a disposición por el responsable en sobre cerrado.

CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Procedencia

Artículo 181. En contra de las resoluciones emitidas por este Instituto, que ponen fin al procedimiento derivado del recurso de revisión, la persona titular o quien le represente podrán interponer el recurso de inconformidad.

El recurso de inconformidad se podrá presentar ante este Instituto o ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro de un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Del envío del recurso de inconformidad al Instituto Nacional

Artículo 182. La Presidencia del Instituto deberá remitir a más tardar al día hábil siguiente de la recepción del escrito del recurso de inconformidad, una versión digitalizada del expediente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por los medios electrónicos autorizados y, en caso de que este así lo requiera, se enviará el expediente físico por correo certificado.

Del informe justificado

Artículo 183. De conformidad con el artículo 168 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto podrá remitir un informe justificado para acreditar la legalidad de la resolución en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de que se notificó el acuerdo de admisión.

De la resolución notificada por el Instituto Nacional al Instituto

Artículo 184. Una vez recibida la resolución emitida por el Pleno del Instituto Nacional, este Instituto tendrá un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se recibió la notificación, para emitir una nueva resolución conforme a lo que se haya modificado o revocado, según lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley General.

De la nueva resolución

Artículo 185. La Secretaría Ejecutiva de este Instituto dará vista al Instituto Nacional una vez que se emita la nueva resolución ordenada.

Del cumplimiento de la nueva resolución

Artículo 186. Es responsabilidad de este Instituto notificar al sujeto obligado responsable y vigilar el cumplimiento de la nueva resolución.

CAPÍTULO V DEL TRÁMITE DE LA ATRACCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL

Procedencia

Artículo 187. El Instituto Nacional podrá conocer sobre los recursos de revisión pendientes de resolución en el Instituto, que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con lo señalado en el artículo 130 de la Ley General.

En todo momento se observará lo señalado en el Capítulo IV, Título Noveno de la Ley General y en los presentes Lineamientos.

Notificación al Instituto Nacional

Artículo 188. Cuando un recurso de revisión sea interpuesto contra actos del propio Instituto, la Presidencia deberá notificar al Instituto Nacional, dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición del recurso.

Petición de atracción

Artículo 189. El Pleno del Instituto, previo análisis de los aspectos del fondo del asunto, podrá solicitar al Instituto Nacional que ejerza la facultad de atracción de los asuntos que considere cumplen con los lineamientos y criterios establecidos para ello, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición del recurso de revisión.

Notificación de atracción

Artículo 190. Cuando el Instituto reciba la notificación de que será atraído el recurso de revisión por el Instituto Nacional, la Coordinación de Asuntos Jurídicos deberá preparar el expediente correspondiente para remitirlo al Instituto Nacional, previa copia certificada que permanezca en resguardo de los archivos institucionales.

TÍTULO OCTAVO FACULTAD DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LAS INVESTIGACIONES PREVIAS Y DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Facultad de vigilancia y verificación

Artículo 191. De conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley Estatal, el Instituto, a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales, tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos.

Las actuaciones que lleve a cabo el personal del Instituto durante la sustanciación de las investigaciones previas, o en su caso, del procedimiento de verificación, deberán hacerse constar en el expediente que se tramita.

Fe pública

Artículo 192. En el ejercicio de las funciones de investigación y verificación, el personal adscrito a la Coordinación de Protección de Datos Personales, así como a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, estará dotado de fe pública para constar la veracidad de los hechos con relación a las actuaciones a que se refiere el presente Título.

Principios rectores

Artículo 193. Las investigaciones previas y el procedimiento de verificación deberán desarrollarse bajo los principios de legalidad, certeza jurídica, independencia,



imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia que rigen la actuación del Instituto, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación.

Deber de confidencialidad

Artículo 194. De conformidad con lo previsto en el artículo 69 segundo párrafo de la Ley Estatal, en el ejercicio de las funciones de investigación, vigilancia y verificación, el personal del Instituto estará obligado a guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en virtud de la investigación previa y, en su caso, el procedimiento de verificación correspondiente.

Constancia de las actuaciones

Artículo 195. Las actuaciones que lleve a cabo el personal del Instituto durante la sustanciación de las investigaciones previas o, en su caso, del procedimiento de verificación, deberán hacerse constar en el expediente en que se tramita.

Notificaciones

Artículo 196. Durante la realización de investigaciones previas, así como en el desarrollo del procedimiento de verificación, las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y resoluciones definitivas podrán realizarse:

- I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia en el domicilio del interesado;
- II. Mediante oficio entregado por mensajería o correo certificado con acuse de recibo;
- III. A través de medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo hubiere aceptado expresamente el interesado y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de las mismas;
- IV. Por edictos, cuando se desconozca el domicilio de la persona interesada o en el caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido o no tenga domicilio fijo; o,
- V. Por estrados, fijándose durante quince días hábiles el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público ubicado en las oficinas del Instituto.

Tratándose de denuncias presentadas a través del sistema electrónico habilitado por este Instituto o cualquier otro medio que para tal fin establezca, se entenderá que la persona promovente acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dichos sistemas o

mediante otros medios electrónicos generados por éstos, salvo que señale expresamente un medio distinto para tales efectos.

Notificaciones personales

Artículo 197. De conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo anterior, las notificaciones personales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

- I. En el caso de las personas titulares de datos personales, se harán en el domicilio de la interesada o en el último domicilio del que se tenga constancia de la persona a quien se deba notificar. En todo caso, la persona servidora pública del Instituto deberá cerciorarse del domicilio y deberá entregar el documento original del acto que se notifique, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación sin que ello afecte su validez;
- II. Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante; a falta de ambos se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que el interesado espere a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado o la persona con que se entiende la diligencia se niegue a recibir o firmar el citatorio, se dejará con el vecino más próximo guardando la confidencialidad de los datos personales;
- III. Si la persona a quien hubiera que notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio;
- IV. De las diligencias en que conste el citatorio y la notificación, la persona servidora pública tomará razón por escrito;
- V. En el caso de los responsables, las notificaciones se deberán realizar, en todos los casos, por oficio, en cuyo caso no será necesario tomar razón por escrito ni levantar acta de notificación; sin embargo, deberá recabarse el acuse de recibo correspondiente en el que se plasme el nombre del responsable, la fecha, hora y firma o rúbrica de con quien se entendió la diligencia;
- VI. Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido sus efectos la notificación;
- VII. Se tendrá como fecha de notificación por mensajería o correo certificado la que conste en el acuse de recibo; y,

VIII. Toda notificación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión de la resolución o acto que se notifique.

Improcedencia del procedimiento de verificación y de las investigaciones previas

Artículo 198. De conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la Ley General, las investigaciones previas y el procedimiento de verificación no procederán en aquellos supuestos de procedencia del recurso de revisión.

CAPÍTULO II DE LAS INVESTIGACIONES PREVIAS

Inicio de las investigaciones previas

Artículo 199. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley Estatal y 147 de la Ley General, previo a dar inicio al procedimiento de verificación, el Instituto, con el fin de contar con elementos suficientes a efecto de dilucidar sobre los hechos que presuntamente podrían constituir un incumplimiento a la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, podrá desarrollar investigaciones previas.

Cuando estas sean de oficio, será a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales y, cuando sean a petición de parte, será a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Lo anterior, para fundar y motivar el acuerdo de inicio a que hace referencia el artículo 208 fracción II de los presentes Lineamientos.

Las investigaciones previas podrán iniciar:

- I. De oficio:** cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir, de manera fundada y motivada, la existencia de violaciones a la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos; o,
- II. A petición de parte:** por denuncia de la persona titular cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la Ley General, la Ley Estatal y demás normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Presentación de la denuncia

Artículo 200. De conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo anterior, la presentación de las denuncias ante el Instituto podrá realizarse a través de los siguientes medios:

- I. **Por escrito libre:** a través de documento presentado de manera personal o mediante correo certificado en el domicilio del Instituto; o,
- II. **Por medios electrónicos:** a través de correo electrónico, o bien, mediante el sistema electrónico que para tal efecto establezca el Instituto.

Horarios y días de recepción de la denuncia

Artículo 201. El Instituto recibirá las denuncias, por escrito y medios electrónicos, en días y horas hábiles.

Las denuncias recibidas en horas y días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente al de su recepción.

Contenido de la denuncia

Artículo 202. La denuncia a que hace referencia el artículo 199 fracción II de los presentes Lineamientos, no deberá contener mayores requisitos que los previstos en el artículo 148 de la Ley General, que se describen a continuación:

- I. El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de quien le represente;
- II. El domicilio de la persona que denuncia, o medio para recibir notificaciones;
- III. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para probar su dicho;
- IV. El responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su identificación y/o ubicación; y,
- V. La firma de la persona denunciante, o en su caso, de quien le represente. En caso de no saber firmar, bastará la huella digital.

Si las denuncias se presentaron por escrito o medios electrónicos, se deberá observar lo siguiente:

- a. Si la denuncia se presentó por escrito, ésta deberá contener la firma autógrafa de la persona denunciante, a menos que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso se imprimirá su huella digital, o



- b. Si la denuncia se presentó por medios electrónicos, ésta deberá incluir el documento digitalizado que contenga la firma autógrafa.

Asignación de número de expediente y notificación a la persona denunciante

Artículo 203. Una vez que da inicio la investigación previa ya sea de oficio, o bien, a petición de parte, se asignará un número de expediente para su identificación y, en su caso, se acusará recibo de la denuncia respectiva, debiendo notificarse a la persona denunciante a través del medio señalado para tal efecto, en términos de lo previsto por el artículo 148 último párrafo de la Ley General.

Cuando la investigación previa se realice a petición de parte, la Secretaría Ejecutiva procederá a turnarlo a la Ponencia que, por orden de prelación, corresponda para su debida sustanciación.

Estudio y análisis de la denuncia

Artículo 204. Derivado del estudio y análisis de la descripción de los hechos manifestados en la denuncia, así como a partir de la información presentada por la persona denunciante, la Ponencia, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, podrá:

- I. Reconducir la denuncia, si se ubica en alguno de los supuestos de procedencia de los recursos de revisión señalados en el artículo 55 de la Ley Estatal, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de que se tuvo por presentada la denuncia;
- II. Orientar a la persona denunciante sobre las instancias legales a las que puede acudir en defensa de sus derechos, en caso de no resultar competente el Instituto, en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de que se tuvo por presentada la denuncia, o
- III. Prevenir a la persona denunciante, en caso de que su denuncia no sea clara, o bien, no cumpla con los requisitos que señalan los artículos 148 de la Ley General y 202 de los presentes Lineamientos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de que se tuvo por presentada la denuncia.

En el caso de la fracción III del presente artículo, si la persona denunciante no diera contestación a la prevención de referencia en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, se desechará la denuncia.

Requerimientos del Instituto

Artículo 205. Cumplidos los requisitos que debe contener la denuncia, o bien, una vez iniciada de oficio la investigación previa, la Ponencia, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos o de la Coordinación de Protección de Datos Personales, respectivamente, podrá:

- I. Expedir requerimientos de información dirigidos al responsable, al encargado o a cualquier tercero, solicitando que se proporcione la información y documentación que se estime oportuna;
- II. Que se manifieste respecto de los hechos vertidos en la denuncia; y,
- III. Que aporte la información y documentación que acredite su dicho, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de dicho requerimiento.

Contenido de las respuestas a los requerimientos

Artículo 206. Conforme a lo previsto en el artículo anterior, las respuestas a los requerimientos formulados por la Ponencia, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos o de la Coordinación de Protección de Datos Personales, deberán contener por lo menos, lo siguiente:

- I. El nombre completo y cargo de la persona servidora pública que promueve, así como la denominación de la unidad administrativa y del responsable al que se encuentra adscrita. En caso de actuar en representación de alguna persona moral, con el carácter de encargado o de tercero, deberá adjuntarse el documento, en original o copia certificada, que acredite su identidad y personalidad;
- II. El medio para recibir notificaciones, y
- III. Las documentales que acrediten su dicho, así como la precisión de cualquier información que considere necesaria para la atención del requerimiento formulado.

Requerimientos adicionales

Artículo 207. Cuando se cuente con información suficiente proporcionada por las partes conforme a lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, la Ponencia, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, deberá realizar el análisis y estudio de cada asunto.

Si existiera información que no sea del todo clara o precisa, la Ponencia, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, podrá requerir nuevamente a la persona denunciante,



al responsable denunciado, al encargado o a cualquier tercero, que proporcione la información solicitada, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento respectivo.

En caso de considerarse necesario, la Ponencia, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, podrá dar vista a la persona denunciante para que manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte información y documentación adicional respecto de la respuesta proporcionada por el responsable denunciado, el encargado o cualquier tercero, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

Conclusión de las investigaciones previas

Artículo 208. Una vez concluida la investigación previa, el Instituto, a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales, o la Ponencia, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, según sea el caso, deberá emitir un acuerdo de:

- I. **Determinación:** cuando, de manera fundada y motivada, no cuente con elementos suficientes para acreditar actos u omisiones que presuntamente constituyan un incumplimiento a lo establecido por la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, o
- II. **Inicio del procedimiento de verificación:** cuando de manera fundada y motivada, se presuma que el responsable incurrió en acciones u omisiones que constituyen un probable incumplimiento a la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se turnará a la Coordinación de Protección de Datos Personales. En el documento que da inicio al procedimiento de verificación se deberá señalar lo siguiente:
 - a. El nombre de la persona denunciante;
 - b. El objeto y alcance del procedimiento, precisando circunstancias de tiempo, lugar, visitas de verificación a las oficinas o instalaciones del responsable o del lugar en donde se encuentren ubicadas las bases de datos personales y/o requerimientos de información. En los casos en que se actúe por denuncia, el Instituto podrá ampliar el objeto y alcances del procedimiento respecto del contenido de aquella, debidamente fundada y motivado;
 - c. La denominación del responsable y su domicilio;
 - d. El lugar y fecha de la emisión del acuerdo de inicio; y
 - e. La firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición.



Duración de las investigaciones previas

Artículo 209. Las investigaciones previas tendrán una duración máxima de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere emitido el acuse de recibo de la denuncia correspondiente.

Las investigaciones previas se tendrán por concluidas en la fecha en que se emita el acuerdo de determinación o, en su caso, el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación respectivo.

Las constancias del expediente de investigaciones previas deberán formar parte del expediente de verificación que, en su caso, se dé inicio conforme al siguiente Capítulo.

CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Procedencia del procedimiento de verificación

Artículo 210. El procedimiento de verificación se podrá iniciar:

- I. **De oficio:** cuando el Pleno del Instituto, a propuesta de la Coordinación de Protección de Datos Personales, apruebe el programa anual de verificación de oficio;
- II. **Derivado de una investigación previa.**

Acuerdo de inicio

Artículo 211. El procedimiento de verificación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio a que hace referencia el artículo 208 fracción II de los presentes Lineamientos, el cual constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación por parte del Instituto, a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales, y tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.

El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación de oficio podrá ser emitido por el Pleno del Instituto, o bien, por la Coordinación de Protección de Datos Personales.

Procedimiento de verificación en instancias de seguridad

Artículo 212. Para el caso de los procedimientos de verificación relacionados con instancias de seguridad pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 segundo párrafo de la Ley General, se requerirá en la resolución, la aprobación del Pleno del Instituto por mayoría calificada, es decir, el voto a favor de por lo menos dos personas Comisionadas; así como de una fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo del Instituto y para los fines previstos en el artículo 150 de la Ley General.

Notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de verificación

Artículo 213. El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación se deberá notificar personalmente al responsable en el domicilio que hubiere señalado para tal efecto y, en los casos en que el procedimiento hubiera iniciado por medio de una denuncia, también se deberá notificar a la persona denunciante en el medio que, para el caso concreto, hubiera designado.

Sustanciación del procedimiento de verificación

Artículo 214. El procedimiento de verificación se sustanciará de la siguiente manera:

- I. **Requerimientos de información:** el Instituto deberá emitir los oficios correspondientes dirigidos al responsable o a cualquier tercero para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación, realice lo siguiente:
 - a. Presente las pruebas que considere pertinentes sobre el tratamiento que brinda a los datos personales, y
 - b. Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los hechos materia de la verificación y el procedimiento instaurado en su contra, y/o
- II. **Visitas de verificación:** el Instituto deberá realizar aquéllas que sean necesarias en las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales o se realice el tratamiento de los datos personales objeto del procedimiento de verificación, teniendo una duración máxima de cinco días hábiles cada una, con la finalidad de que se allegue de la documentación e información necesaria sobre el tratamiento que el responsable lleva a cabo.



El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de un procedimiento de verificación, a sus bases de datos personales o tratamientos de éstos, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información.

Desarrollo de las visitas de verificación

Artículo 215. Las visitas de verificación que lleve a cabo el personal adscrito a la Coordinación de Protección de Datos Personales del Instituto, deberán aprobarse por el Pleno, y se realizarán conforme a lo siguiente:

- I. El personal del Instituto deberá presentarse en las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas o se realicen tratamientos de los datos personales objeto del procedimiento de verificación, con el oficio de comisión y la orden de verificación debidamente fundados y motivados, documentos que estarán firmados por la persona que funja como titular de la Coordinación de Protección de Datos Personales. Se deberá precisar el domicilio del responsable o el lugar donde deba de practicarse la visita, así como el objeto y alcance de la misma;
- II. El personal del Instituto tendrá acceso a las instalaciones del responsable, podrá solicitar la información y documentación que estime necesaria para llevar a cabo la visita de verificación. Al iniciar la visita, el personal verificador del Instituto que desarrolle la diligencia deberá exhibir la credencial con fotografía vigente, expedida por el Instituto, que lo acredite para desempeñar dicha función, así como dejar un ejemplar en original de la orden de verificación y del oficio de comisión con quien se entienda la visita, y
- III. Las visitas de verificación concluirán con el levantamiento del acta correspondiente, en la que quedará constancia de las actuaciones practicadas durante la visita o visitas de verificación. Dicha acta se levantará en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiera entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiera negado a proponerlos.

Tratándose de la fracción III del presente artículo, el acta se deberá emitir por duplicado, será firmada por el personal del Instituto y por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia, quien podrá formular observaciones en el acta de la visita de verificación y manifestar lo que a su derecho convenga en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito dentro del término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera realizado la visita en cuestión.

En caso de que la persona que atiende la verificación se niegue a firmar el acta, se hará constar expresamente dicha circunstancia en la misma. Dicha negativa no afectará la validez de las actuaciones o de la propia acta.

La firma de la persona que atiende la verificación supondrá sólo la recepción de la misma, debiendo entregársele uno de los originales del acta de verificación, incorporándose el otro a las actuaciones.

Contenido del acta de verificación

Artículo 216. En el acta de verificación a que se refiere la fracción III del artículo anterior, se hará constar:

- I. La denominación del responsable;
- II. La hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita de verificación;
- III. Los datos que identifiquen plenamente el domicilio, tales como calle, número, colonia, municipio y código postal en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita de verificación, así como número telefónico u otra forma de comunicación disponible con el responsable;
- IV. El número, fecha del oficio de comisión y la orden de verificación que la motivó;
- V. El nombre completo y cargo de la persona con quien se entendió la visita de verificación, así como copia del documento que acredite su identidad;
- VI. El nombre completo y domicilio de las personas que fungieron como testigos, así como copia del documento que acredite su identidad;
- VII. Los datos relativos a la actuación;
- VIII. La declaración de la persona que atiende la verificación, si quisiera hacerla, y
- IX. El nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de verificación, incluyendo los de quienes la hubieran llevado a cabo. Si se negara a firmar la persona que atendió la verificación o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el personal verificador asentar la razón relativa.

Medidas cautelares

Artículo 217. De conformidad con el artículo 149 párrafos cuarto y quinto de la Ley General, el Instituto, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos o de la Coordinación de Protección de Datos Personales, según corresponda, podrá ordenar medidas cautelares si del desahogo de las investigaciones previas y/o del procedimiento de verificación advierte un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, siempre y

cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de bases de datos de los responsables.

Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y serán temporales hasta entonces los responsables lleven a cabo las recomendaciones hechas por el Instituto.

Solicitud de medidas cautelares por parte de la persona titular

Artículo 218. La persona titular podrá solicitar al Instituto la aplicación de medidas cautelares cuando considere que el presunto incumplimiento del responsable a las disposiciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, le causa un daño inminente o irreparable a su derecho a la protección de datos personales.

Para tal efecto, el Instituto, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos o de la Coordinación de Protección de Datos Personales, deberá considerar los elementos ofrecidos por la persona titular, en su caso, así como aquéllos que tenga conocimiento durante las investigaciones previas y/o la sustanciación del procedimiento de verificación para determinar la procedencia de la solicitud de la persona titular.

Improcedencia de las medidas cautelares

Artículo 219. La aplicación de medidas cautelares será improcedente cuando:

- I. Tengan por efecto dejar sin materia el procedimiento de verificación;
- II. Eximan al responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, o
- III. Impidan el cumplimiento de las atribuciones y funciones de los responsables, conferidas por la normatividad que les resulte aplicable o impliquen el aseguramiento de sus bases de datos.

Tipos de medidas cautelares

Artículo 220. Las medidas cautelares que puede ordenar el Instituto podrán consistir en lo siguiente:

- I. El cese inmediato del tratamiento, de los actos o las actividades que estén ocasionando o puedan ocasionar un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales;
- II. La realización de actos o acciones cuya omisión hayan causado o puedan causar un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales;



- III. El bloqueo de los datos personales en posesión del responsable y cuyo tratamiento esté provocando o pueda provocar un daño inminente o irreparable a las personas titulares; y,
- IV. Cualquier otra medida de acción o de omisión que el Instituto considere pertinente dirigida a proteger el derecho a la protección de los datos personales de las personas titulares.

Reconsideración de la aplicación de medidas cautelares

Artículo 221. Si durante el procedimiento de verificación, el Instituto, a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales, advierte nuevos elementos que pudieran modificar la medida cautelar previamente impuesta, éste deberá notificar al responsable, al menos, con veinticuatro horas de anticipación, la modificación a que haya lugar fundando y motivando su actuación.

Conclusión del procedimiento de verificación

Artículo 222. El procedimiento de verificación de oficio concluirá con la resolución que emita el Pleno del Instituto, en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la misma determine.

La resolución del procedimiento de verificación será notificada personalmente, mediante oficio, al responsable y a la persona denunciante a través del medio que hubiera proporcionado para tal efecto.

En las verificaciones por denuncia, la Coordinación de Protección de Datos Personales deberá remitir un dictamen de la verificación a la Ponencia, para que, a través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, elabore la resolución que estime procedente, la cual deberá ser votada por el Pleno del Instituto.

Duración del procedimiento de verificación

Artículo 223. El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio respectivo, en términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley General, el cual no podrá ser prorrogable.

Impugnación de las resoluciones del procedimiento de verificación

Artículo 224. Las resoluciones dictadas por el Instituto en el procedimiento de verificación serán vinculantes, definitivas e inatacables para los responsables; las personas titulares



podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional interponiendo el recurso de inconformidad previsto en la Ley General o, ante el Poder Judicial de la Federación mediante el Juicio de Amparo.

CAPÍTULO IV

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

Cumplimiento de las resoluciones de los procedimientos de verificación

Artículo 225. El responsable, a través de la Unidad de Transparencia o el Comité de Transparencia, según corresponda, dará estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto recaídas a los procedimientos de verificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley General.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el responsable podrá solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días hábiles del plazo otorgado al responsable para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Rendición de informe de cumplimiento de las resoluciones de los procedimientos de verificación

Artículo 226. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el responsable deberá entregar un informe al Instituto a través del cual señale las acciones y gestiones realizadas para dar cumplimiento a la resolución derivada de un procedimiento de verificación, acompañando la documentación que acredite sus manifestaciones y declaraciones.

Procedimiento de verificación del cumplimiento

Artículo 227. El Instituto, a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales, deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la resolución, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere tenido por presentado el informe de cumplimiento a que se refiere el artículo anterior.



Si el Instituto, a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales, considera que se dio cumplimiento a la resolución recaída a un procedimiento de verificación, deberá emitir un acuerdo de cumplimiento y ordenar el archivo del expediente.

En caso contrario, el Instituto deberá:

- I. Emitir un acuerdo de incumplimiento;
- II. Notificar al superior jerárquico de la persona servidora pública encargada de dar cumplimiento, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día siguiente que surta efectos la notificación, se dé cumplimiento a la resolución bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una medida de apremio en los términos señalados en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades administrativas de la persona servidora pública inferior, y
- III. Determinar las medidas de apremio que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Título Noveno de los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO V

AUDITORÍAS VOLUNTARIAS

Auditorías voluntarias

Artículo 228. De conformidad con lo previsto en el artículo 151 de la Ley General, los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de auditorías por parte del Instituto, las cuales tengan por objeto verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

El Instituto, en su caso, podrá proponer la realización de auditorías programadas por sectores específicos conforme al programa de trabajo que sea aprobado para tal efecto.

Serán desarrolladas por el personal adscrito a la Coordinación de Protección de Datos Personales.

Improcedencia de las auditorías voluntarias

Artículo 229. Las auditorías voluntarias a que se refiere el artículo anterior no procederán cuando:



- I. El Instituto tenga conocimiento de una denuncia, o bien, esté sustanciando un procedimiento de verificación relacionado con el mismo o similar tratamiento de datos personales que se pretende someter a este tipo de auditorías, o
- II. El responsable sea seleccionado de oficio para ser verificado por parte del Instituto.

Presentación de la solicitud de auditoría voluntaria

Artículo 230. El procedimiento para que el Instituto realice una auditoría voluntaria siempre deberá iniciar a petición del responsable.

El responsable podrá presentar directamente su solicitud en el domicilio del Instituto, o bien, a través de cualquier otro medio que éste habilite para tal efecto.

Requisitos de la solicitud de auditoría voluntaria

Artículo 231. En la solicitud para pedir al Instituto la realización de una auditoría voluntaria, el responsable deberá señalar la siguiente información:

- I. Su denominación y domicilio;
- II. Las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones;
- III. La descripción del tratamiento de datos personales que se pretende someter a una auditoría voluntaria, indicando, de manera enunciativa más no limitativa, las finalidades de éste; el tipo de datos personales tratados; las categorías de titulares involucrados; las transferencias que, en su caso, se realicen; las medidas de seguridad implementadas; la tecnología utilizada, así como cualquier otra información relevante del tratamiento;
- IV. Las circunstancias o razones que lo motivan a someterse a una auditoría voluntaria;
- V. El nombre, cargo y firma de la persona servidora pública que solicita la auditoría, y
- VI. Cualquier otra información o documentación que considere relevante hacer del conocimiento del Instituto.

Respuesta del Instituto a la solicitud de auditoría voluntaria

Artículo 232. Una vez recibida la solicitud de auditoría voluntaria, el Instituto contará con un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud, para emitir un acuerdo en el que podrá:

- I. Admitir la solicitud de auditoría voluntaria, o



- II. Requerir información al responsable en caso de que la solicitud no sea clara, o bien, cuando éste omita manifestarse sobre alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlos.

Tratándose de la fracción II del presente artículo, el responsable tendrá un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento de información, para que subsane las omisiones de su solicitud. En caso contrario, la solicitud de auditoría se tendrá por no presentada.

El Instituto deberá notificar el acuerdo a que se refiere el presente artículo, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del día de la emisión de éste.

Auditoría

Artículo 233. Para el desahogo de la auditoría voluntaria, el Instituto podrá, de manera conjunta, indistinta y sucesivamente:

- I. Requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con el tratamiento de datos personales auditado; y/o,
- II. Realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado.

Requerimientos de información

Artículo 234. Los requerimientos de información que dirija el Instituto al responsable auditado deberán estar fundados, motivados y señalar la descripción clara y precisa de la información o documentación solicitada, la cual deberá estar relacionada con el tratamiento de datos personales objeto de auditoría.

El responsable auditado deberá atender los requerimientos de información en los plazos y términos que el Instituto establezca.

Visitas

Artículo 235. Para la realización de visitas a las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado, el Instituto deberá emitir una orden, debidamente fundada y motivada, la cual deberá ser notificada al responsable auditado en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la emisión de la orden.

La orden de visita que se notifique al responsable auditado deberá contener, al menos, lo siguiente:

- I. La fecha de emisión de la orden de visita;
- II. La denominación del responsable y su domicilio;
- III. El nombre y cargo de la persona servidora pública del Instituto que realizará la visita;
- IV. La descripción clara y precisa de los objetivos y alcances de la visita, los cuales deberán estar relacionados con el tratamiento de datos personales objeto de la auditoría voluntaria;
- V. La solicitud al responsable para que designe a las personas servidoras públicas que atenderán la visita;
- VI. La fecha y hora en que se realizará la visita;
- VII. La firma autógrafa de la autoridad que expide la orden, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; y,
- VIII. Cualquier otra información o requerimiento que determine el Instituto según las circunstancias particulares de la auditoría voluntaria.

Realización de diligencias y/o reuniones

Artículo 236. Durante el tiempo de realización de la auditoría voluntaria, el Instituto podrá realizar diligencias y/o reuniones de trabajo que considere pertinentes con el responsable auditado, con el objeto de contar con mayores elementos antes de emitir su informe.

Actas de visitas, diligencias y/o reuniones de trabajo

Artículo 237. De toda visita, diligencia y/o reunión de trabajo celebrada, el Instituto deberá levantar un acta en la que hará constar lo siguiente:

- I. El lugar, fecha y hora de realización de la visita, diligencia y/o reunión de trabajo;
- II. La denominación del responsable;
- III. El nombre completo y cargo de la persona servidora pública que atendió la visita, diligencia y/o reunión de trabajo;
- IV. Los nombres completos y cargos de todas las personas servidoras públicas que intervinieron;
- V. La narración circunstanciada de los hechos ocurridos durante la visita, diligencia y/o reunión de trabajo; y,
- VI. El nombre completo y firma de la persona servidora pública que representa al Instituto, así como al responsable.



Obligaciones del responsable auditado

Artículo 238. Durante el desarrollo de la auditoria voluntaria, el responsable deberá:

- I. Proporcionar y mantener a disposición de las personas auditoras autorizados por el Instituto la información, documentación o datos relacionados con el tratamiento de datos personales objeto de la auditoria voluntaria;
- II. Permitir y facilitar a los auditores autorizados del Instituto el acceso a archiveros, registros, archivos, sistemas, equipos de cómputo, discos o cualquier otro medio o sistema de tratamiento de los datos personales objeto de la auditoria voluntaria; y,
- III. Permitir el acceso al personal auditor autorizado por el Instituto al lugar, a las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado.

El responsable auditado no podrá negar el acceso a la información y documentación relacionada con el tratamiento de datos personales auditado, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información en términos de lo dispuesto en la normatividad que resulte aplicable.

El personal auditor autorizado por el Instituto podrá obtener copias de los documentos o reproducir, por cualquier medio, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que tengan relación con el tratamiento de datos personales objeto de la auditoria voluntaria.

Informe final

Artículo 239. Concluida la auditoria voluntaria, el Instituto deberá emitir un informe final en el cual señale los resultados obtenidos de la auditoria y se pronuncie sobre la conformidad o no conformidad de los controles, mecanismos o procedimientos adoptados por el responsable auditado para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, respecto del tratamiento de datos personales auditado.

Aunado a lo previsto en el párrafo anterior, el informe final deberá orientar al responsable sobre el fortalecimiento y un mejor cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, señalando medidas, acciones, recomendaciones y sugerencias específicas, de carácter preventivo y/o correctivo, en función de las características generales y particularidades del tratamiento de datos personales y de los hallazgos obtenidos en la auditoria.



El Instituto deberá notificar al responsable auditado el informe final a que se refiere el presente artículo dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la emisión del informe.

Seguimiento a las observaciones y recomendaciones

Artículo 240. El Instituto podrá solicitar al responsable que informe sobre la implementación de las recomendaciones emitidas en el informe final en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento.

Duración máxima del procedimiento de auditoría

Artículo 241. El procedimiento de auditoría deberá tener una duración máxima de cincuenta días hábiles, el cual podrá ampliarse por un periodo igual por una sola vez cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

TÍTULO NOVENO DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CAPÍTULO ÚNICO DE LAS MEDIDAS DE APREMIO

Tipos de medidas de apremio

Artículo 242. De conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley Estatal, el Instituto podrá imponer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, la amonestación pública o la multa equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Para la determinación y ejecución de las medidas de apremio a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto, además de observar lo dispuesto en el Capítulo XII de la Ley Estatal, deberá cumplir con las disposiciones señaladas en el presente Título.

Área encargada de calificar la gravedad de las faltas y proponer las medidas de apremio

Artículo 243. De conformidad con lo previsto en el artículo 74 último párrafo de la Ley Estatal, las áreas encargadas de calificar las medidas de apremio impuestas por el Pleno del Instituto serán: la Coordinación de Asuntos Jurídicos, cuando se trate de denuncias y recursos de revisión y, la Coordinación de Protección de Datos Personales cuando se trate de verificaciones de oficio y/o aquellas que deriven del programa anual de verificación.

Calificación y propuesta de la medida de apremio

Artículo 244. Para calificar la gravedad de las faltas y proponer la medida de apremio que corresponda, la Coordinación de Asuntos Jurídicos o la Coordinación de Protección de Datos Personales, según sea el caso, deberá tomar en cuenta los siguientes supuestos:

- I. El incumplimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el Pleno del Instituto, a que se refiere la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.
- II. El incumplimiento de las resoluciones derivadas del procedimiento de verificación a que se refiere la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos o la Coordinación de Protección de Datos Personales, según sea el caso, deberá someter a consideración del Pleno del Instituto el proyecto de calificación de la gravedad de la falta, para que éste determine la imposición de la medida de apremio que corresponda.

Cuando se trate del incumplimiento a las determinaciones de la Ponencia ocurridas durante la sustanciación del recurso de revisión, la calificación de la gravedad de la falta, así como la medida de apremio a imponer serán propuestas por la Ponencia en la resolución que corresponda, misma que será aprobada por el Pleno del Instituto.

Área encargada de determinar e imponer las medidas de apremio

Artículo 245. El Pleno del Instituto será el encargado de determinar e imponer las medidas de apremio a que se refiere la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Área encargada de notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio

Artículo 246. La Coordinación de Asuntos Jurídicos o la Coordinación de Protección de Datos Personales, en caso de verificaciones, serán las áreas encargadas de notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio impuestas por el Pleno del Instituto.

Criterios para la determinación de medidas de apremio

Artículo 247. De conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley Estatal, para calificar las medidas de apremio el Instituto deberá considerar:

- I. **La gravedad de la falta del responsable considerando:**



- a. **El daño causado:** el perjuicio, menoscabo o agravio a los principios generales o bases constitucionales, reconocidos en el artículo 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la afectación a los principios, objetivos y obligaciones previstas tanto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos;
 - b. **Los indicios de intencionalidad:** los elementos subjetivos que permiten individualizar el grado de responsabilidad, entendidos como el aspecto volitivo en la realización de la conducta antijurídica. Para determinar lo anterior, deberá considerarse si existió contumacia total para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia o, en su caso, se acreditó estar en las vías de cumplimiento a las mismas;
 - c. **La duración del incumplimiento:** el periodo que persistió el incumplimiento, y,
 - d. **La afectación al ejercicio de las atribuciones del Instituto:** el obstáculo que representa el incumplimiento al ejercicio de las atribuciones de éste conferida en el artículo 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.
- II. **La condición económica del infractor:** el área encargada de calificar la gravedad de las faltas podrá requerir al infractor, a las autoridades competentes, así como a las instituciones financieras, la información y documentación necesaria para determinar la condición económica del infractor. Sin perjuicio de lo anterior, deberán utilizarse los elementos que se tengan a disposición o las evidencias que obren en registros públicos, páginas de internet oficiales, medios de información o cualesquier otra que permita cuantificar la multa.
- III. **La reincidencia:** el que habiendo incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. La reincidencia deberá ser considerada como agravante, por lo que siempre deberán consultarse los antecedentes del infractor.

Reglas generales de la notificación de las medidas de apremio

Artículo 248. La notificación que contenga la imposición de la medida de apremio deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución correspondiente, y contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación del medio de impugnación que proceda.

Las diligencias o actuaciones para llevar a cabo la notificación de la imposición de medidas de apremio, se efectuarán conforme al horario de labores del Instituto.



Las diligencias o actuaciones que inicien en hora hábil y terminen en hora inhábil se tendrán por legalmente practicadas; y las que se lleven a cabo fuera del horario de labores del Instituto se tendrán por realizadas a primera hora del día hábil siguiente.

La Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Protección de Datos Personales de oficio o a petición de parte interesada, podrán habilitar días inhábiles cuando así lo requiera el asunto.

Medios para notificar las medidas de apremio

Artículo 249. La notificación de las medidas de apremio podrá realizarse:

- I. Personalmente a la persona infractora responsable de dar cumplimiento a la determinación del Pleno del Instituto;
- II. Por correo electrónico o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, según corresponda el tipo de procedimiento, al responsable y/o a la persona denunciante y/o a la persona recurrente para su conocimiento y cumplimiento a la resolución;
- III. Por oficio, a la autoridad responsable de ejecutar la medida de apremio impuesta; y
- IV. A través de cualquier otro medio que hubiese señalado la persona recurrente y/o denunciante.

Notificaciones personales

Artículo 250. Las notificaciones personales de las medidas de apremio a la o las personas infractoras y responsables de dar cumplimiento a las determinaciones del Pleno del Instituto, se realizará en el domicilio del responsable que se encuentre señalado en el Padrón, o bien en el domicilio del Instituto cuando la persona acuda voluntariamente a notificarse.

La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, a falta de ambos, el personal habilitado del Instituto dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que la persona a notificar espere a una hora fijada del día hábil siguiente. En caso de que el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en un lugar visible del mismo, dejándose constancia en el acta circunstanciada que se levante.

Si la persona a que haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se realizará a través de cédula y se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio



en que se realice la diligencia y, de negarse esta a recibirla o en su caso, de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible en el domicilio, lo que se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

La cédula contendrá mención del expediente de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona con quien se entienda la diligencia deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo.

Con independencia de la notificación personal que se le haga a la persona infractora responsable de dar cumplimiento a la resolución, el término para dar cumplimiento empezará a correr a partir de la notificación al sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o correo electrónico oficial, según corresponda el tipo de procedimiento.

Notificaciones por correo o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

Artículo 251. Las notificaciones que, según corresponda el tipo de procedimiento, se realicen a través de correo electrónico, se realizarán a través los correos electrónicos oficiales del Instituto a los correos que la persona recurrente y/o denunciante hubiere señalado, así como el que hubiere señalado el responsable en el Padrón en los casos de verificación de oficio y denuncias, y el que hubiere señalado en el expediente en los casos de recursos de revisión y denuncias.

Las notificaciones que se realicen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se realizarán a través de las cuentas de usuario oficiales del Instituto a la cuenta oficial del responsable y a la cuenta desde la cual hubiere interpuesto el recurso de revisión la persona recurrente.

Notificaciones por oficio

Artículo 252. Cuando para la ejecución de las medidas de apremio se necesite la intervención de una autoridad distinta, se notificará a través de oficio donde se indique, por lo menos:

- I. La persona o personas responsables de cumplir con las determinaciones del Instituto; y
- II. Los plazos, condiciones y, en su caso, los procedimientos para su cumplimiento.



Al oficio de notificación se acompañarán todas aquellas documentales que sirvan como sustento a la imposición de la medida de apremio que corresponda.

Notificación de incumplimientos

Artículo 253. Cuando en seguimiento a las resoluciones que emita el Pleno del Instituto se emita un acuerdo de incumplimiento donde se le aperciba a la persona responsable de dar cumplimiento de la resolución de las medidas de apremio a las que se podrá hacer acreedora en caso de no dar cumplimiento a la resolución, su notificación deberá seguir las reglas establecidas para las notificaciones personales establecidas en los presentes Lineamientos.

Imposición y ejecución de las amonestaciones públicas a personas servidoras públicas

Artículo 254. En términos de lo previsto en el artículo 77 de la Ley Estatal, la Coordinación de Asuntos Jurídicos solicitará al superior jerárquico inmediato de la persona infractor que se haga efectiva la amonestación pública de que se trate.

Imposición y ejecución de las amonestaciones públicas a partidos políticos

Artículo 255. Cuando se trate de partidos políticos, la Coordinación de Asuntos Jurídicos o la Coordinación de Protección de Datos Personales, según el caso, requerirá al Instituto Estatal Electoral de Baja California la ejecución de la amonestación pública impuesta.

Seguimiento de la ejecución de la multa

Artículo 256. La Coordinación de Administración y Procedimientos, posterior comunicación institucional que le remitan la Coordinación de Asuntos Jurídicos o la Coordinación de Protección de Datos Personales, según sea el caso, deberá gestionar y dar seguimiento a la ejecución de la multa, por lo que solicitará a la Secretaría de Hacienda que proceda a su cobro, mediante oficio que contenga, al menos, el monto total de la multa impuesta, el domicilio del infractor, la fecha de su notificación y demás datos que resulten relevantes para la ejecución de la misma.

No será impedimento para la Secretaría de Hacienda ejecutar una multa impuesta a personas servidoras públicas adscritas a dicha entidad.



Denuncias penales

Artículo 257. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Sanciones de carácter económico

Artículo 258. Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Publicación en el portal de internet del Instituto.

Artículo 259. El Instituto deberá publicar una lista de las personas servidoras públicas responsables de los responsables que hayan sido sancionados por incumplimiento a las disposiciones y resoluciones emitidas por el Pleno, siempre y cuando dichas sanciones hayan quedado firmes y definitivas para todos los efectos legales.

El incumplimiento será difundido a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales, en el portal de internet del Instituto, por lo que el área que dio cuenta al Pleno con el incumplimiento deberá proporcionar la información necesaria.

TÍTULO DÉCIMO
DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE OFICIO A LOS RESPONSABLES
RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
CAPÍTULO ÚNICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Evaluación del Desempeño

Artículo 260. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 fracción XIV y 69 de la Ley Estatal, la Coordinación de Protección de Datos Personales del Instituto diseñará y aplicará los indicadores y criterios que sean aprobados por el Pleno del Instituto para evaluar el desempeño de los responsables respecto del cumplimiento de la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

El Pleno del Instituto aprobará el programa anual de verificaciones de oficio.

Las verificaciones de oficio tendrán por objeto determinar el estado general que guarda el cumplimiento de la Ley General y la Ley Estatal por parte de los responsables.



Instrumentos técnicos de verificación

Artículo 261. El Instituto aprobará los Instrumentos de verificación que sean necesarios para medir el desempeño de los responsables respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables en la materia, los cuales contemplarán, al menos, el tipo de verificación, la metodología, los criterios, los formatos y los indicadores de cumplimiento que permitan la realización del ejercicio de verificación que corresponda.

Se entenderá por instrumentos técnicos de verificación todos aquellos documentos de índole técnica, aprobados por el Pleno del Instituto, para el ejercicio de las atribuciones previstas en la fracción XIV del artículo 45 y 69 de la Ley Estatal.

Obligatoriedad de los instrumentos técnicos de verificación

Artículo 262. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en los instrumentos técnicos de verificación es obligatorio para los responsables del ámbito estatal y municipal a que se refiere el artículo 3 de los presentes Lineamientos.

Programa anual de verificación

Artículo 263. Las verificaciones se realizarán conforme al programa que apruebe anualmente el Pleno del Instituto.

Apartado virtual de Protección de Datos Personales en los sitios de Internet de los responsables

Artículo 264. Los responsables deberán habilitar en su portal de internet, un apartado denominado "Protección de datos personales", el cual debe contar cuando menos, con el o los avisos de privacidad integrales aplicables a los tratamientos de datos del sujeto obligado, datos de contacto de la Unidad de Transparencia, así como de su Oficial de Protección de Datos, e información relevante en materia de protección de Datos Personales.

La publicación en dicho apartado podrá servir a los responsables como un medio para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 17, 47, 56, 84, 117 y 133 de los presentes Lineamientos.

Dicho apartado será el medio idóneo que servirá a los responsables para rendir cuentas a las personas titulares y al Instituto sobre el tratamiento de los datos personales en su



posesión, permitiendo evaluar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones; atendiendo a la obligatoriedad que les corresponde como responsables, en términos de lo previsto en los artículos 13 y 15 de la Ley Estatal.

Este apartado será repositorio también de las documentales que se utilicen en los ejercicios de verificación, cuyas características y contenido se establecerán en el Programa Anual de verificación de oficio.

La información contenida en dicho apartado deberá estar disponible y actualizada de forma permanente.

Resultado de las verificaciones

Artículo 265. El Instituto, informará a los responsables los resultados de la verificación de oficio que corresponda y podrá emitir recomendaciones de carácter particular respecto de los hallazgos que resulten de la aplicación de los criterios e indicadores, cuyo plazo para su aclaración o atención no podrá rebasar los 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

La emisión de estas recomendaciones no limita las facultades de investigación y verificación del Instituto, cuando se advierta algún incumplimiento a las disposiciones de la Ley General, la Ley Estatal o los presentes Lineamientos.

Informe anual sobre el desempeño en el cumplimiento de las disposiciones legales

Artículo 266. El Pleno del Instituto aprobará anualmente un informe con los resultados de la evaluación y la medición del desempeño de los responsables sobre el cumplimiento de la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables en la materia, en términos del Programa Anual de Verificación que corresponda al ejercicio fiscal de que se trate.

El informe anual contendrá el reporte sobre el resultado de la o las evaluaciones del desempeño y seguimiento a las recomendaciones emitidas en relación con la verificación que corresponda.

El informe a que hace referencia este artículo deberá aprobarse a más tardar en el primer trimestre del año siguiente sobre el que se realicen la o las verificaciones y deberá publicarse en la página de Internet del Instituto.

Recomendaciones y asesoría técnica para la implementación de los instrumentos técnicos de evaluación

Artículo 267. Los responsables podrán solicitar asesoría técnica del Instituto para el cumplimiento de los criterios e indicadores previstos en los instrumentos técnicos de verificación a que se refiere el presente Capítulo.

Asimismo, el Instituto a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales programará asesorías técnicas dirigidas a orientar a los responsables en la implementación de los criterios e indicadores previstos en los instrumentos técnicos de verificación.

Transitorios

Primero. Se aprueban los Lineamientos de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California.

Segundo. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día hábil siguiente a su aprobación por el Pleno del Instituto.

Tercero. Se abrogan los Lineamientos aprobados en fecha once de agosto de dos mil veinte, así como su posterior modificación de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós.

Cuarto. Los responsables deberán contar con el apartado virtual de protección de datos personales en sus sitios de Internet al que hace referencia el artículo 264 de los presentes Lineamientos, dentro de los primeros seis meses del ejercicio 2024.

Quinto. Con la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, todos los procedimientos, investigaciones, verificaciones y cualquier otro asunto en materia de protección de datos personales a que se refiere la Ley y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, se sujetarán a la presente reforma.

Sexto. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y en el portal de Internet del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, para su debida observancia.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, integrado por el COMISIONADO PRESIDENTE, **JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA**; COMISIONADA



PROPIETARIA, **LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ**; COMISIONADO PROPIETARIO,
JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO; quienes lo firman ante la SECRETARIA
EJECUTIVA, **JIMENA JIMÉNEZ MENA**, que autoriza y da fe. -----

JOSÉ RODOLFO MUÑOZ GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE

LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ
COMISIONADA PROPIETARIA

JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO
COMISIONADO PROPIETARIO

JIMENA JIMÉNEZ MENA
SECRETARIA EJECUTIVA